

Huila y Caquetá

Capacidades locales para la paz

HUILA

CAQUETÁ

05/06



Recursos y retos para el postconflicto



Recursos y retos para el postconflicto en la región Huila y Caquetá

Capacidades locales para la paz

Autora:

María Carolina Meza

Con la colaboración de:

Jéniffer González

Ariel Ávila



05/06



Capacidades locales para la paz

Recursos y retos para el postconflicto en la región de Huila y Caquetá

Fundación Ideas para la Paz

María Victoria Llorente	Directora Ejecutiva
Sergio Guarín	Coordinador Área de Postconflicto y Construcción de Paz
María Carolina Meza	Investigadora Principal
Paulo Tovar	Investigador
Juan Mauricio Torres	Investigador
Juan Diego Duque	Asistente de Investigación
Bernardo Pérez	Asesor

Equipos regionales

Huila - Caquetá

Jéniffer González	Coordinadora regional
Andrea Castañeda	Asesora regional
Yineth Arévalo	Investigadora regional
Adriana Rojas	Gestora local
Edillamid Quintero	Gestora local
Diana Toledo	Gestora local
Gloria Durán	Gestora local

Norte de Santander

Juan Carlos Cordón	Coordinadores regionales
Mario Quiñones	
Felipe Moreno	Asesores regionales
Carolina Gutiérrez	
Nubia Mendoza	Investigadora regional
Alexa Salas	Gestora local
Yaneth Ugarte	Gestora local
Katherine Lobo	Gestores locales
Fernando Lemus	

Antioquia - Chocó

Isabel Berrío	Coordinadora regional
David Yepes	Asesores regionales
Deysi Manco	
Óscar Castaño	Investigador regional
Patricia Salas	Gestora local
Jaqueline Arenas	Gestora local
Elizabeth Montoya	Gestora local
Gloria Olaya	Gestora local
Emilce Perea	Gestora local

Cauca

Elmer Guevara	Coordinador regional
Alejandro Hurtado	Asesor regional
Érica Agredo	Investigadora regional
María Victoria Villamil	Gestora local
Carolina Hernández	Gestora local
José Libardo Solarte	Gestora local
Óscar Leyton	Gestor local



Fotografías
Archivo Fundación Ideas para la Paz
Archivo Publicaciones Semana

Corrección de estilo
Luis Silva

Diseño y diagramación impresos
Ladoamable
www.ladoamable.com

Diseño y diagramación multimedia
Carlos Arango

Impresión
Zetta Comunicaciones

Impreso en Colombia

ISBN Volumen: 978-958-59274-3-8
ISBN Obra Completa: 978-958-59274-1-4

El multimedia de esta serie puede consultarse
en la página **www.ideaspaz.org**

Fundación Ideas para la Paz, 2015

Tel. (57-1)2183449

Calle 100 No. 8ª - 37, Torre A, Oficina 305

www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

Agradecimientos

La Fundación Ideas para la Paz agradece a todas las personas, organizaciones e instituciones que hicieron posible la realización de esta serie. Al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y su equipo, en especial a la Directora de Gobierno y Gestión Territorial, Sandra Devia, gracias por su apoyo decidido a la realización de este proyecto. A la Fundación Paz y Reconciliación, y en especial a León Valencia, su Director Ejecutivo, a Ariel Ávila, Magda Paola Núñez, Carlos Montoya, Naryi Vargas y Juan Diego Castro, gracias por ser coequiperos en el desarrollo de este sueño conjunto.

Todas las metodologías utilizadas en el desarrollo de esta investigación son de autoría conjunta de las Fundaciones Ideas para la Paz y Paz y Reconciliación, así como también son compartidas muchas de las conclusiones, conceptos y discusiones presentadas en estos textos. A Bernardo Pérez, que gestionó con un liderazgo especial este proyecto e hizo parte integral de él en distintas modalidades, un sentimiento de aprecio y gratitud especial. Gracias también a Bernardo Prieto, Efraín García, Alejandra González y Katja Groesschen por su apoyo en la sistematización del trabajo de campo y la revisión de algunos apartados de la serie.

Este proyecto contó con el apoyo financiero, en la fase de difusión nacional y local de resultados, del Programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); nuestra gratitud a ellos por sumarse a esta iniciativa de paz.

Finalmente, gracias a las comunidades e instituciones de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Huila y Norte de Santander, por abrirnos sus puertas y compartir con nosotros sus experiencias y sus sueños.

Los resultados, opiniones y recomendaciones publicadas en esta serie son responsabilidad exclusiva de la Fundación Ideas para la Paz y del equipo Investigador, y por lo tanto no comprometen a estas personas y entidades.



Contenido

I. Presentación	11
II. Introducción	15
2.1. Municipios y subregiones focalizadas en el Huila y Caquetá	15
2.2. Actividades realizadas en la región en el marco del proyecto	16
III. Caracterización de la región	19
3.1. Presentación geográfica, demográfica y productiva	19
3.2. Historia del conflicto en la región	20
3.3. La situación actual de seguridad en la región	22
IV. Recursos y retos para el posconflicto	26
4.1. La sociedad civil en el postconflicto	27
4.1.1. La justicia comunal y el postconflicto	27
4.1.2. Activismo social en la región: un recurso para la paz producto del conflicto.	29
4.1.3. Postconflicto y cultura democrática	35
4.2. El Estado en la región	38
4.2.1. Conflictos por el uso del suelo	38
4.2.2. Repliegue vs. Mayor presencia de la fuerza pública: visiones encontradas sobre las políticas de seguridad en la región.	41
4.3. Visiones de desarrollo	43
4.3.1. Lo más esperado: inversión social en el campo	43
4.3.2. Desarrollo sostenible: minería vs. desarrollo rural	45
V. Recomendaciones regionales	51
Referencias	55



A nuestro entender, la violencia que experimentamos desde hace al menos cincuenta años – y que ha tenido tan diversas expresiones – hunde sus raíces en asuntos estructurales, como la estrechez de nuestra cultura política, la institucionalidad rentística imperante, el matrimonio entre política y violencia, y las relaciones extorsivas entre el centro político y las regiones.

I. Presentación

A inicios de 2014 un grupo de investigadores de las Fundaciones Ideas para la Paz (FIP), y Paz y Reconciliación (PARES) emprendimos la aventura de realizar, gracias al apoyo del Ministerio del Interior, un proyecto orientado a preparar el escenario de Postconflicto en Colombia. Lo anterior en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en la Habana, Cuba. Nuestro horizonte tuvo dos inamovibles. Uno, la convicción profunda de que el conflicto armado colombiano debe resolverse por la vía negociada. Y dos, nuestra creencia en que ninguna negociación, por exitosa que sea, traerá por sí sola la paz a nuestro país.

A nuestro entender, la violencia que experimentamos desde hace al menos cincuenta años – y que ha tenido tan diversas expresiones – hunde sus raíces en asuntos estructurales, como la estrechez de nuestra cultura política, la institucionalidad rentística imperante, el matrimonio entre política y violencia, y las relaciones extorsivas entre el centro político y las regiones.

Por ese motivo, si queremos construir la paz en nuestro país no es suficiente que los grupos armados ilegales depongan sus armas y se reintegren a la vida civil. Además de ello, tenemos el enorme reto de realizar cambios en nuestras instituciones (entendidas como ordenamientos jurídicos y leyes, y como diseños institucionales), en nuestras relaciones y, en general, en el modo en que hacemos las cosas. Se trata de un desafío profundo, que parte del reconocimiento de los dilemas que ya mencionamos y, también, de la toma de consciencia sobre el camino que hemos recorrido. Detener el espiral de la violencia es un

reto de la sociedad colombiana en su conjunto, el cual requiere tanta esperanza como realismo.

De acuerdo con este marco interpretativo, preparar el postconflicto implica diversas tareas. Una de las más urgentes es saber qué está pasando efectivamente en las regiones. En efecto, si no comprendemos detalladamente las dinámicas del conflicto, el modo en que los actores ilegales operan en los territorios, la relación entre el Estado y los ciudadanos, los mercados legales e ilegales, las expectativas de las comunidades y los recursos con los que se cuenta a nivel institucional y comunitario, difícilmente podremos hacer frente a los dilemas que nos planteará el postconflicto. En ese sentido, es fundamental que las políticas públicas, sobre todo las provenientes del nivel nacional, se formulen con base en diagnósticos cercanos de la realidad local y que atiendan de manera efectiva la realidad territorial y sus distintos rostros.

Por otro lado, resulta inaplazable emprender el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales para gestionar y hacer frente a los dilemas propios del postconflicto. Desde nuestro punto de vista, son estos actores locales los que podrán hacer la diferencia en un contexto de cambio y de incertidumbre como el que supondrán, seguramente, la transición y posterior estabilización. Son ellos quienes, con base en la experiencia acumulada y teniendo en cuenta los horizontes y expectativas territoriales, asumirán la responsabilidad de construir la nueva ciudadanía en las regiones afectadas por el conflicto armado y podrán reclamar como suyo el triunfo de la implementación exitosa de los acuerdos de paz. El postconflicto es, desde esta perspectiva, un cometido de naturaleza profundamente territorial, en el marco del cual las capacidades territoriales deben reconocerse y fortalecerse de manera sistemática.

Bajo estas premisas, y en cumplimiento del convenio de asociación M069 suscrito entre la Fundación

Ideas para la Paz y el Ministerio del Interior con el objeto de fortalecer *“la gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el marco del posconflicto”*, desarrollamos el proyecto *“Capacidades locales para la paz”*. En el marco de éste aportamos a la preparación de un escenario de postconflicto en Colombia mediante la realización de una investigación participativa sobre visiones, desafíos y recursos para la paz en 46 municipios afectados por el conflicto armado en nuestro país.

En la serie conformada por éste y por otros cinco documentos, y un multimedia¹, ponemos a consideración de los lectores interesados el resumen del proceso, metodología y resultados del proyecto *“Capacidades locales para la paz”*. Esta publicación materializa, además, parte del apoyo que recibimos del Programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), los cuales aportaron al proyecto en la fase de difusión nacional y local de resultados.

La serie se conforma de un documento de síntesis de resultados, un documento de metodología y cuatro documentos regionales. Todos ellos fueron posibles gracias al esfuerzo y dedicación no sólo de los investigadores que participamos en el proyecto sino también de las cientos de personas que contribuyeron con sus vivencias, testimonios y perspectivas a la realización de las diversas actividades que propusimos en campo. Hemos escrito estas líneas con la esperanza de que los ciudadanos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila y Norte de Santander que tuvimos el privilegio de conocer en el transcurso de estos meses, vean reflejadas sus expectativas sobre el postconflicto en ellas. Nuestro reconocimiento y gratitud a ese conjunto de ciudadanos que día a día construyen la paz de nuestro país.



• • •
¹ Ver: www.ideaspaz.org



Bajo la idea de “Capacidades locales para la paz” se buscó aportar a la preparación territorial de un escenario de posconflicto en Colombia, mediante un proceso de investigación y de intervención participativa, que fue implementado en 46 municipios de seis departamentos colombianos, históricamente golpeados por la violencia armada.

II. Introducción

En el presente documento se dan a conocer los principales hallazgos para la región del Huila y Caquetá obtenidos en el marco del proyecto “*Capacidades locales para la paz*”. Este se realizó gracias al convenio para el “*fortalecimiento de la gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el marco del posconflicto*” suscrito entre el ministerio del Interior y la Fundación Ideas para la Paz en 2014, y que se desarrolló con el apoyo de la Fundación Paz y Reconciliación.

De forma complementaria, el proyecto contó, en su fase final, con el apoyo del Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario (CORE) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que cuenta con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En el marco de esta cooperación fue posible elaborar los presentes documentos, así como talleres de devolución de resultados del proyecto en cada una de las regiones focalizadas, los que sirvieron, a su vez, para dar un adecuado cierre al proceso con los participantes locales.

El proyecto buscaba aportar a la preparación territorial de un escenario de posconflicto en Colombia, mediante un proceso de investigación y de intervención participativa, el que fue implementado durante el 2014 en 46 municipios de seis departamentos colombianos históricamente golpeados por la violencia armada.

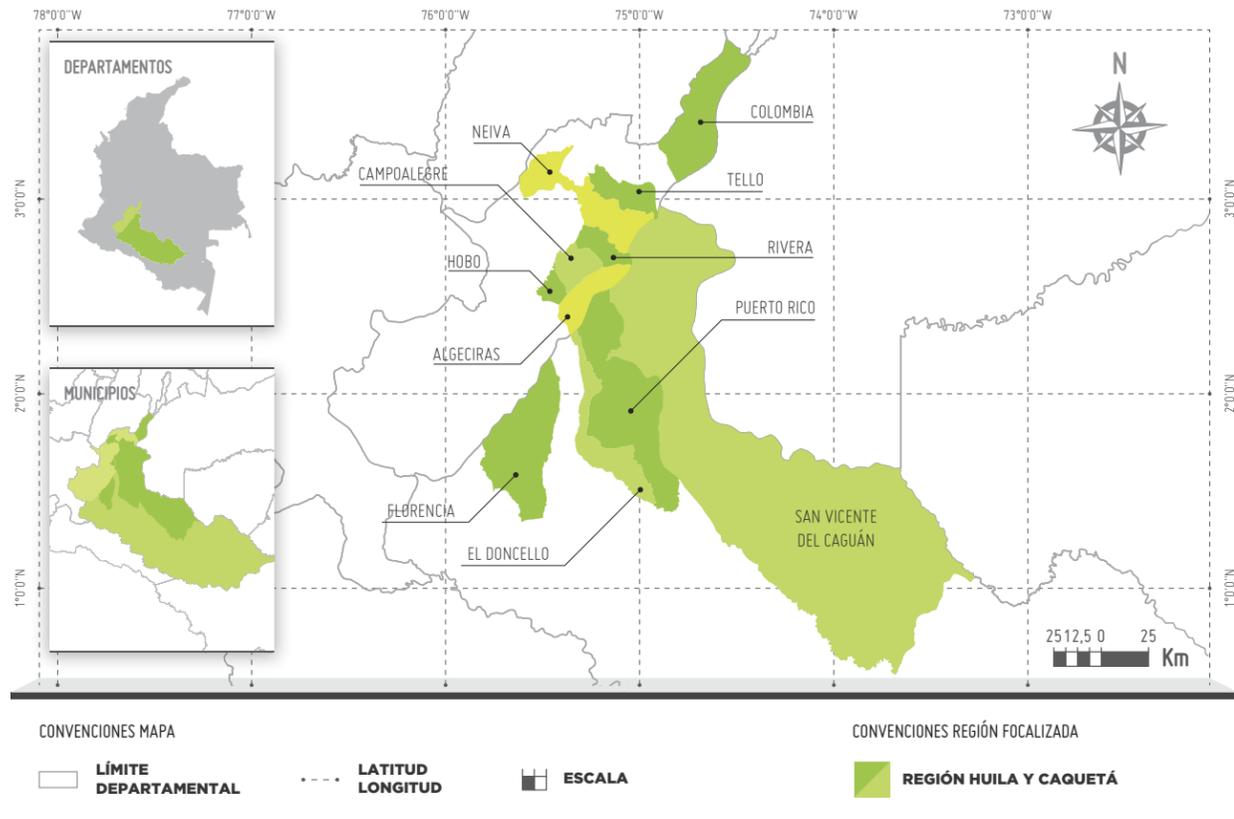
Las acciones del proyecto obedecieron a tres componentes. El primero, de investigación, pretendía generar luces sobre el estado actual del conflicto en las regiones focalizadas, así como la percepción de las comunidades sobre las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y se llevó a cabo mediante casi 100 entrevistas a actores locales,

recopilación y procesamiento de datos estadísticos, también revisión de diferentes informes y estudios en temas de seguridad y conflicto armado en las regiones. El segundo, de intervención, buscaba activar capacidades comunitarias para la paz, a través de diversos ejercicios individuales y colectivos de diálogo sobre visiones regionales, análisis de contexto e identificación de experiencias y recursos; con representantes del sector público, la sociedad civil y el sector productivo. Este componente implicó la realización de 266 entrevistas y grupos focales, 42 diálogos locales y un Taller nacional de intercambio de experiencias y análisis de políticas. Y el tercer componente estaba orientado al análisis de las capacidades institucionales en materia de seguridad y convivencia ciudadana, orden público y conflictividad social, y el apoyo a las alcaldías y gobernaciones en el tema. Por tal motivo se llevaron a cabo entrevistas a mandatarios, un Taller nacional, un análisis de la ejecución presupuestal de las regionales focalizadas, un diagnóstico de planes e instancias de coordinación local y departamental en la materia, y apoyos específicos a mandatarios e instancias de coordinación.

2.1. Municipios y subregiones focalizadas en el Huila y Caquetá

En los departamentos del Huila y Caquetá, el proyecto trabajó sobre once municipios históricamente afectados por el conflicto armado. Para facilitar el trabajo de campo y ofrecer una mirada subregional, estos se dividieron en cuatro subregiones. La primera correspondió a los del Huila de Colombia, Tello y Neiva; la segunda a los del Huila de Rivera, Campoalegre, Algeciras y Hobo; la tercera San Vicente del Caguán y Puerto Rico en Caquetá; y la cuarta El Doncello y Florencia, también en Caquetá. Así, el proyecto trabajó en siete municipios focalizados del Huila y cuatro del Caquetá.

MAPA 1:
Municipios focalizados en los departamentos del Huila y Caquetá.



Fuente: Elaboración FIP.

2.2. Actividades realizadas en la región en el marco del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se contó con un equipo regional de siete personas, quienes trabajaron bajo la coordinación nacional. Las diversas actividades

llevadas a cabo incluyeron entrevistas a actores sociales, del sector productivo y gubernamental, grupos focales, diálogos regionales y sesiones de asistencia técnica a miembros de consejos de seguridad y comités de orden público. La tabla 1 (página siguiente) resume las diversas actividades de campo realizadas en la región:

TABLA /01
Actividades efectuadas en la región Huila - Caquetá

COMPONENTE	TIPO DE ACTIVIDAD	TOTAL POR ACTIVIDAD
INVESTIGACIÓN	Entrevistas a profundidad	14
	Entrevistas apreciativas	40
	Grupos focales	2
INTERVENCIÓN	Diálogos sobre visiones y recursos (1)	7
	Diálogos sobre retos y experiencias de paz a partir de cartografía social (2)	6
	Diálogos conjuntos (1 y 2)	0
	Taller de intercambio de experiencias	1
	Asistencia técnica a Consejos de Seguridad y Convivencia, y Comités de Orden público	2
ANÁLISIS Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL	Entrevistas a mandatarios	12
	Taller de mandatarios	1
TOTAL		85

Fuente: elaboración propia a partir de los registros del proyecto.

De acuerdo con la información compilada y sistematizada, se hicieron 85 actividades regionales, además del taller de devolución de resultados. A los 13 diálogos regionales asistieron en promedio 21 personas de distintos sectores. Al final del trabajo de campo en la región, se convocó a los mandatarios a un Encuentro

nacional de alcaldes y gobernadores que tenía como objetivo generar una reflexión conjunta sobre los retos de un escenario de paz, e identificar aprendizajes y oportunidades de las regiones para el posconflicto. Así mismo, se llevó a cabo un Taller nacional de intercambio de experiencias de construcción de paz, al que

se convocaron diversos líderes regionales, que habían participado en las actividades del proyecto.

Todo el trabajo de campo permitió identificar visiones, recursos y retos para el posconflicto en la región. De las diversas actividades surgieron una serie de conclusiones y recomendaciones de política que develan las grandes expectativas y preocupaciones de la región frente a un posible escenario de paz; visibilizan experiencias y recursos para la paz que existen ya en la región, y facilitan la identificación de retos y oportunidades para la implementación de políticas públicas en el posconflicto en este territorio.

El documento se divide en cuatro partes. La primera corresponde a esta introducción. La segunda tiene como objetivo dar una caracterización general de los municipios y unas referencias sobre la historia del conflicto armado en las zonas focalizadas en la región, con el propósito de contextualizar al lector. En la tercera se presentan algunos retos y recursos de la región para el posconflicto, identificados en el proceso de conversación con los distintos actores. Finalmente, la cuarta

parte presenta recomendaciones para los distintos actores de la región que buscan aportar a la preparación del sector estatal, social y privado en un futuro proceso de transición.

El documento busca devolverles los resultados del proyecto a los participantes, resaltando su voz y siendo una plataforma para visibilizar sus aportes a la construcción de visiones regionales de paz y posconflicto para la región. También dar recomendaciones a los tres niveles de gobierno y a los diversos actores sociales para la construcción de paz y la definición de acciones para el postconflicto.

Este documento forma parte de una serie de publicaciones que dan cuenta de los resultados nacionales y regionales del proyecto, así como de su metodología y enfoque. Además, se complementa de un multimedia donde se presentan algunos recursos regionales, cuantitativos y cualitativos, construidos en el marco del proyecto. Se espera que estas publicaciones contribuyan al clamor nacional de lograr construir una paz estable y duradera en Colombia.

III. Caracterización de la región

La presente sección ofrece una caracterización general de la región Huila-Caquetá, haciendo énfasis en los municipios focalizados por el proyecto. Por este motivo, a continuación se realiza una presentación geográfica, demográfica y productiva de los municipios que conforman la región. Luego se hará un recuento de los hitos políticos, sociales, económicos y culturales más relevantes; y, por último, se hace un corto análisis de la situación de conflicto armado hoy en la región.

Esto con el fin de contextualizar las visiones, retos y recursos identificados por los participantes del proyecto, analizados en el capítulo siguiente de este documento.

3.1. Presentación geográfica, demográfica y productiva

Los departamentos del Huila y el Caquetá están ubicados en el sur del país, al occidente y oriente de la cordillera oriental, y sus capitales son Neiva y Florencia, respectivamente. En la siguiente tabla se presentan algunas estadísticas demográficas de la región.

TABLA /02
Estadísticas generales de Huila y Caquetá

HUILA		CAQUETÁ	
MUNICIPIOS	37	MUNICIPIOS	16
SUPERFICIE	19.890km²	SUPERFICIE	88.965 km²
	1.140.539		471.541
POBLACIÓN (CENSO 2005)	457.723 rural	POBLACIÓN (CENSO 2005)	192.824 rural
	682.816 cabecera		278.717 cabecera
DENSIDAD POBLACIONAL	57 hab/km²	DENSIDAD POBLACIONAL	5,2 hab/km²
	97% mestizo		96% mestizo
	1% afrocolombiano		2% afrocolombiano
POBLACIÓN	1% indígena (etnias mayoritarias: Misak, Nasa, Yanakona, Tama - Páez y Pijao)	POBLACIÓN	2% indígena (etnias mayoritarias: Koreguaje, Huitotos, Inganos, Misak, Nasa, Embera-Chami, entre otros)
RESGUARDOS INDÍGENAS	16	RESGUARDOS INDÍGENAS	42

Fuentes: Elaboración propia con información del DANE; Universidad Antonio Nariño, 2001; y Plan de desarrollo del Huila, 2008 - 2011.

Entre los municipios focalizados sobresalen San Vicente del Caguán en el Caquetá, por ser el más importante de la región y uno de los más grandes del país, y Neiva en el Huila, por ser el que cuenta con mayor número de habitantes, 340.046. Caquetá, a pesar de ser el departamento más extenso, es el de menor presencia poblacional de la región. Entre otros factores, esto se debe a que es un departamento joven², con difíciles condiciones de acceso y movilidad en el territorio, y en parte selvático, lo que lo hace beneficiario de amplias zonas de protección.

La región Huila - Caquetá se caracteriza por tener una vocación agropecuaria. En el departamento del Huila, según el DANE, en el 2013 predominaban los cultivos de frutales, frijol, arroz, cacao y café, así como la ganadería y la piscicultura (La Nación, 2013). La producción de café ocupa el primer renglón de la economía del departamento del Huila, y ha sido merecedora en varias oportunidades del primer puesto en calidad en el país. En el caso del Caquetá, su vocación es mayormente pecuaria, y esta ocupa el primer renglón de la economía del departamento (Gobernación de Caquetá, 2015), al punto de que la producción láctea atrajo la atención de la multinacional Nestlé. Por otro lado, las economías extractivas han tomado gran fuerza en la región. La explotación petrolera y minera, y las centrales hidroeléctricas y represas son los protagonistas del modelo de desarrollo económico impulsado en la región.

3.2. Historia del conflicto en la región

La región Huila - Caquetá es una zona de influencia histórica de las FARC, igualmente, un corredor estraté-

gico para el tráfico de estupefacientes provenientes del Caquetá y Putumayo los que son transportados hacia la costa caribe y pacífica, el Valle del Cauca o el interior del país, con los que se conecta por carreteras. Estos corredores han servido para el movimiento de las tropas de las FARC y el tráfico de insumos químicos necesarios en el procesamiento de la pasta base de coca (MOE, Corporación Nuevo Arcoiris, s.f). Igualmente es una zona de exacción armada o extorsiones que se aplican principalmente en las áreas de mayor influencia de las FARC y en Neiva.

La presencia de este grupo ilegal en el Huila y Caquetá inicia con la ejecución de las directrices de la primera conferencia de las FARC realizada en 1964 y la cuarta conferencia de El Pato en 1971, *“donde se definieron los primeros núcleos de expansión: el oriente del Huila, colindante con las regiones de los ríos Duda, Ariari, Guayabero en el Meta, El Pato en el Caquetá y el occidente del Huila, colindante con Riochiquito en Cauca y Marquetalia en Tolima”* (Tovar Zambrano, 1995).

Las acciones adelantadas por el Estado para acabar con el naciente grupo guerrillero fueron militares. La primera ocurrió en la región de El Pato con la operación *“Marcha Negra”* o *“Marcha de la Muerte”* entre 1965 y 1966. Esta acción militar generó el éxodo de 200 familias de campesinos y colonos hacia la selva, quienes regresan ocho años después, en el marco de la *“Operación Retorno”* adelantada por el ejército y los gobiernos nacional y local.

Luego vino el exterminio de la Unión Patriótica (UP) en la década de los años 80, a cargo de grupos paramilitares con apoyo de las FF.MM., después de haberse constituido como un movimiento político de izquierda resultante de los diálogos llevados a cabo en el gobierno de Belisario Bentancur con los grupos insurgentes de la región. Esto generó un gran debilitamiento del

movimiento social en el territorio y paralelamente el fortalecimiento de las FARC, que empezaron a conformar lo que hoy se conoce como los Bloques Sur, Oriental y el Comando Central Conjunto de Occidente, agudizando los enfrentamientos armados y, por tanto, el conflicto en sí mismo.

Los años posteriores estuvieron marcados por continuos enfrentamientos entre las guerrillas de las FARC y las Fuerzas Armadas, así como hostigamientos efectuados por el Ejército a la población civil a la que acusaba de auxiliadora de la guerrilla, sobre todo en el municipio de Colombia, donde los desplazamientos masivos ocurridos en 1984 hicieron que algunas veredas se convirtieran en territorios fantasma. Un hecho impactante para la región fue el asesinato, por parte de las FARC, en 1996, de Jesús Ángel González Arias, gobernador del Caquetá en ese entonces y quien se disponía a cumplirles una cita a las FARC con el propósito de negociar la liberación del congresista Rodrigo Turbay Cote (El Líder, 2011).

En medio de la creciente dinámica del conflicto en el país, el presidente Andrés Pastrana pone a los colombianos a soñar con la paz, al establecer la *“zona de distensión”* en 1999, área en la que se adelantaría un proceso de paz con las FARC, y con el que pretendía dar por terminado el conflicto armado. La zona de distensión comprendía 42.000 km² y la conformaban los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá. Durante esta fase de negociación, las guerrillas aprovecharon la zona de distensión para consolidar su dominio en el territorio, y los grupos paramilitares justificaron su expansión en la región con la retirada de las FF.MM. También, durante estos años las Fuerzas Armadas vivieron el mayor proceso de profesionalización y adquisición de armamento pesado. Esto puso a la po-

blación civil en medio del fuego por las confrontaciones armadas.

Así, durante la época de las fallidas negociaciones el deterioro de la seguridad y la alteración del orden público se sintieron con mucha fuerza. Dentro de los hechos violentos más significativos ocurridos durante el proceso de diálogos del Caguán se encuentran el magnicidio de la familia Turbay Cote, el 29 de diciembre de 2000, en un retén instaurado por las FARC entre el municipio de El Doncello y Puerto Rico; los secuestros de la precandidata presidencial Ingrid Betancur y su asesora Clara Rojas, el 23 de febrero de 2002; el de 15 personas en el edificio Miraflores en el centro de Neiva, el 26 de julio de 2001, y el del congresista huilense Jorge Eduardo Gechem Turbay, 20 de febrero de 2002 cuando se transportaba en un avión que cubría la ruta Florencia - Neiva - Bogotá. Los dos últimos hechos fueron los detonantes de la ruptura de los diálogos en el 2002, pues sembraron una sensación de crisis de gobernabilidad e inseguridad exacerbada.

Mientras por un lado se mantenía la zona de distensión y se adelantaban los diálogos de paz con las FARC, por otro, los paramilitares que llegaron al Huila y Caquetá a crear los frentes adscritos al Bloque Central Bolívar incrementaban su accionar militar como vía para impedir los diálogos de paz y lograr el control sobre la zona. *“Para el 2002, los paramilitares ya habían consolidado su presencia en el suroccidente del país, en muchos casos con la connivencia o colaboración de algunos agentes del Estado. Dicha presencia se vio reflejada en el incremento de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos y amenazas sobre la población civil, entre ella la del Huila, cuyos municipios más afectados fueron Gigante, Pitalito, Garzón, Neiva, Colombia, Baraya, Hobo, La Argentina, La Plata e Isnos”* (PNUD, 2010), y Caquetá en Be-

lén de los Andaquíes, Paujil, Puerto Rico, El Doncello y Florencia. No obstante, las fuerzas paramilitares no se consolidaron en el Huila, en parte porque no contaron con el apoyo de terratenientes, caso contrario al Caquetá, donde su incursión fue más extendida, hasta el 2006 cuando el Bloque Central Bolívar de las AUC se desmovilizó³ volviendo a retomar el control territorial la guerrilla de las FARC.

Ante el recrudecimiento del conflicto y terminada la zona de despeje, que coincidió con época electoral, los colombianos eligieron la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que proponía una salida militar al conflicto, a esta estrategia se le denominó la “seguridad democrática”. En los municipios que habían servido de escenario para los diálogos del Caguán y sus circunvecinos, se implementa el Plan Patriota y el Plan Consolidación con los que se buscaba desarticular las estructuras de las FARC y fortalecer la presencia estatal en zonas rurales, a través de una amplia militarización de la zona.

Con el objetivo de incrementar los resultados de la estrategia militar, se empiezan a presentar ejecuciones extrajudiciales y capturas masivas por parte de las fuerzas militares, sobre todo en territorios de fuerte dominio de las FARC. Es el caso de Algeciras, que en 2004 presentó dos operaciones militares: Aurora y Reflejo. En ellas se pretendía capturar a más de 200 “auxiliares” que el entonces comandante de la Fuerza de Tarea Algeciras, el coronel Mario Hernández, afirmó vivían en este municipio (El Mundo, 2011). El significativo aumento del pie de fuerza militar en la región llevó a un aumento en la percepción de seguridad sobre todo en las cabeceras municipales, pero llevó también a un cambio en la estrategia de combate de las FARC que cambió los grandes atentados y secuestros por hostigamientos más localizados y basados, en gran medida, en la extorsión.

3.3. La situación actual de seguridad en la región

La historia del conflicto armado en la región ha dejado un saldo trágico para la región, del que se ha ido recuperando lentamente. En la siguiente sección se hace un balance del conflicto armado con las FARC y de otras conflictividades presentes en el territorio en los últimos años.

Control e influencia de las FARC

En los departamentos del Huila y Caquetá hay presencia de diversos frentes de las FARC que están involucrados en varias actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores, entre otros.

En el Caquetá las FARC actúan con el Bloque Sur del Caquetá, con los frentes 3, 13, 14, 15, 32, 49, 63, Columna Móvil Edgar Tovar, Columna móvil Teófilo Forero, y el frente José A. Galán (Morales, 13 de febrero de 2013). Según estos mismos analistas militares, la respuesta del Bloque Sur ante la efectividad de los ataques de la fuerza pública ha sido el fortalecimiento de las milicias, encargadas de la inteligencia, divulgación, promoción, reclutamiento y consolidación de cuadros. Estas se dividen en milicias populares (niños, ancianos y no capacitados para confrontación armada), milicias bolivarianas (especialmente adolescentes en capacidad de asumir las responsabilidades de la confrontación armada), Partido Comunista Clandestino Colombiano -PCCC o PC3- y Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia -MBNC-, conformadas por personas reclutadas de la población civil, incluidos estudiantes y docentes. A continuación una tabla resumen de la presencia de las FARC en el Huila.

TABLA 3.
Presencia de las FARC en el Departamento del Huila para 2014

DENOMINACIÓN	ÁREA DE INFLUENCIA	MUNICIPIOS DE INFLUENCIA	NÚMERO PROBABLE DE MIEMBROS	ESTADO
COLUMNA TEÓFILO FORERO CASTRO (YA NO ES MÓVIL)	Zona Centro	Algeciras, Hobo, Neiva, Garzón	50-60, más 30 RAT	Es el más fuerte de todos los grupos, y se dedica igualmente a la extorsión ⁴ .
FRENTE 17 ANGELINO GODOY	Zona Norte	Vegalarga, Colombia, Tello, Baraya	40-50	Se dedica a la extorsión sobre todo en el Huila.
FRENTE 13 CACICA LA GAITANA	Zona Sur	San Agustín, Isnos, Paletará	30-40	Ha sido desarticulada, pero busca reorganizarse.
FRENTE 66 JOSELO LOZADA	Zona Occidental	Palermo, Teruel, Planadas, La Plata	20-30	Está diezmado

Fuente: Entrevista Neiva.

Las FARC realizan actividades de control social, militar y económico regulando la convivencia y la conflictividad, especialmente en la zona rural. Intervienen en la resolución de disputas dentro y entre familias y comunidades, la economía, relaciones sexuales y sentimentales -le prohíben a la población tener relaciones con miembros de la fuerza pública-, ingreso a zonas, migraciones y desplazamientos. En algunas zonas rurales los Inspectores de Policía y presidentes de JAC están sometidos al control de las FARC y es habitual que, ante casos de desobediencia, la guerrilla tome medidas severas contra dichos líderes comunales. Otras formas de control incluyen el minado de zonas para proteger acceso a cultivos o repeler el ingreso de la fuerza pública, el adoctrinamiento escolar en cátedra bolivariana, y acciones terroristas contra instalaciones de uso público o servicios sociales.

Cultivos de uso ilícito y narcotráfico

A pesar de la presencia extendida de las FARC en el Huila, el departamento no ha sido víctima del flagelo de la coca. Esto se debe a que los terrenos son altamente productivos, ampliamente utilizados para la agricultura y la existencia de baldíos es poca. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc), en 2013 en el Huila tan solo había cuatro hectáreas sembradas de amapola en las zonas altas (Unodc, 2014, pág. 66). Mientras que Caquetá, al año 2013, presentaba 4.322 hectáreas cultivadas de coca, también según Unodc (2014). Puerto Rico es el municipio de la región con mayor número de hectáreas cultivadas (1.064 ha.), lo que representa cerca del 25% de los cultivos del departamento. Adicionalmente, se ha mejorado la semilla de coca para que traiga más alcaloide, lo que ha incrementado su rendimiento⁵. Al respecto, la Unodc señala

³ Esta estructura se desmovilizó el 15 de febrero de 2006.

⁴ Autoridades militares en medios caqueteños han señalado que los extorsionistas del Huila y San Vicente del Caguán son miembros de la Columna Teófilo Forero, primera compañía ‘Wilfredo Castañeda’, a cargo de ‘Zuly’, y que ‘muchas de las llamadas [hacia Huila] salen de estructuras que están del otro lado de la cordillera Oriental, en los municipios de San Vicente y Puerto Rico’ (Periódico El Líder, 2014).

⁵ Entrevista El Doncello.

que aumentó el precio de la hoja de coca en un 41,5% debido al cultivo de nuevas variedades (Unodc, 2014).

En el narcotráfico, la producción de hoja de coca, su cosecha, procesamiento, venta y transporte como alcaloide es controlado por las FARC. La coca es transportada en diversas formas, por ejemplo, en el vientre del ganado en bolsitas de látex que ha tragado el ganado, en el queso, en la madera y en caletas de carros preparados.

En octubre de 2014, la guerrilla pagaba el gramo de coca en El Doncello a \$1.700, mientras que en Puerto Rico el gramo valía \$1.900⁶. Las FARC monopolizan el comercio de la primera y segunda parte de la cadena del narcotráfico, por este motivo, comerciar con otros acarrea riesgos: *“Siempre es más barata con ellos [las FARC] que con el particular o que en centros poblados de gran comercio. Por eso el campesino se les escapa para venderla por fuera, y venderla en el pueblo o al comercio [...], pero se corren unos riesgos al vender por fuera de la guerrilla [...], puede ser un ‘lamado de atención o la muerte’, el castigo depende del comandante o del miliciano, [este último] porque es quien lleva el mensaje”*⁷. Los ingresos de estas actividades suplen los costos de producción y transporte a los mercados locales. Ante esta compleja dinámica generada por los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, en la región tienen una estrategia de sobrevivencia clara: *“entre más ciego, más sordo y más mudo, mejor vive usted en la zona”*⁸.

Por otra parte, el Gobierno nacional utiliza la aspersión y erradicación manuales para combatir los cultivos de hoja de coca, lo que genera protestas de los pobladores y organizaciones, como sucedió en El Doncello, a comienzos de diciembre de 2014. Se critican las fumigaciones que contaminan a largo plazo la tierra, el uso de plaguicidas con efectos en la salud humana, y la

ejecución de políticas de control de cultivos ilícitos sin entregar posibilidades alternas de acceso a mercados, dada la precariedad de infraestructura del Caquetá. Los actores que encabezan estas protestas son miembros del sindicato de docentes, políticos locales, líderes comunales y campesinos locales, con algún apoyo de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordossac), aunque esta se vinculó someramente y con posterioridad a las protestas.

Extorsión

Otra de las grandes problemáticas de seguridad que se presentan en la región es la extorsión. Un 50% de los casos se efectúan desde las cárceles, un 30% por las FARC y un 20% por bandas criminales que no se asocian a un grupo en particular (Campoalegre Noticias, 2014). Las guerrillas extorsionan por igual a los políticos, comerciantes y población civil.

En San Vicente del Caguán se dice que hay extorsión urbana para todas las actividades económicas (El Tiempo, 2011) como producto de las “leyes” de las FARC, y en específico la “ley 002” que creó el llamado impuesto o ley tributaria desde la existencia de la zona de distensión. *“La gente es obediente y lo ve como una contribución al ejército del pueblo y están conscientes de esto, porque el que no lo hace debe irse de San Vicente y la gente prefiere aportar”*⁹. En ocasiones el cobro de la extorsión se hace por intermediación de miembros directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC). También se usa la quema de vehículos para presionar el pago de la extorsión (El Líder, 2014).

En el Huila, se acude desde hace décadas a la instalación de artefactos de bajo poder explosivo al frente

de las instalaciones empresariales en horarios no laborales¹⁰. Esto con el propósito de amedrentar a los empresarios con el daño de su infraestructura, y presionarlos así a pagar las extorsiones.

En la zona urbana de Neiva, la oposición a las extorsiones es más común. El sector ferretero y el de los medianos y pequeños comerciantes de víveres están en abierta resistencia al pago de extorsiones, por lo que las FARC han iniciado actuaciones de retaliación contra los establecimientos que se niegan al pago. En este contexto se observan estrategias de outsourcing criminal, ya que hacen uso de redes de delincuencia común, por ejemplo, bandas juveniles. Entre los sectores y comercios que son objeto de tributación forzada están el ferretero, las funerarias¹¹, los transportadores (como el caso de Cootranshuila y Coomotor) y los proveedores de víveres y abarrotes (Diario del Huila, 2014).

En relación con la forma en que se da la extorsión, un entrevistado en Florencia manifiesta que *“las FARC envían un papel (boleta) o llaman al celular de la víctima. En la citación se convoca a un lugar determinado, que siempre es en área rural, en el cual hay un cabecilla y entre cuatro a diez personas”*. En el lugar de citación *“allí lo atienden a uno bien, si es por la mañana le dan desayuno, o en la tarde le dan almuerzo”,* y luego *“empiezan a pedir la colaboración”*¹². Las FARC les fijan a las personas extorsionadas una cuota que puede oscilar entre el 3 al 10% de las ganancias, que ellos calculan de acuerdo con la actividad que realicen. *“En la zona de El Pato y Guayabero [San Vicente del Caguán], la cosa es más fregada por ser [las FARC] muy guerrerista, y en la zona de Guacamayas [San Vicente del Caguán] son más civilizados y escuchan, son más ‘santistas’”*. (González Arias, 2013).

Otras conflictividades

- **Pandillismo:** En Neiva se identifican actividades de pandillas (más de 30) configuradas inicialmente alrededor del narcotráfico y el hurto en diferentes modalidades (González, 2013:584), y según entrevistados existe la sospecha de que algunas de dichas organizaciones criminales de menor escala son funcionales o contratadas para actividades de apoyo a las FARC en la propia zona urbana, como se mencionó anteriormente.
- **Tierras:** En la región Huila-Caquetá hay grandes conflictividades asociadas a la tenencia de la tierra. Por una parte, cuenta con amplias zonas de reserva forestal, por lo que no se pueden legalizar allí terrenos a campesinos. Existen también problemas por el acaparamiento de tierras por parte de las FARC o por grandes propietarios. Entre el 2012 y comienzos del 2014, en el sur del Huila con el apoyo de campesinos organizados del Caquetá y en Florencia y La Montañita, se presentaron grandes movilizaciones y concentraciones de cafeteros y de campesinos. Reclamaron del Gobierno nacional la negociación de una política agraria integral, lo que generó algunos cambios menores inmediatos, pero sin grandes repercusiones para la región. Por tratarse de un tema de tanta relevancia para la región, se tratará ampliamente en la sección 3.2.1 de este documento.

• • •

⁶ Entrevista El Doncello.

⁷ Entrevista Puerto Rico.

⁸ Entrevista Puerto Rico.

⁹ Entrevista San Vicente.

• • •

¹⁰ Aunque autoridades judiciales aclaran que explosivos puestos en Neiva a finales de la anterior década, en hoteles de Neiva no tenían finalidad extorsiva, sino meramente terrorista, como señala el Periódico El Líder (El Líder, 2014).

¹¹ “De siete empresas cuatro han sufrido atentados que comprenden desde petardos hasta quemas de vehículos funerarios”. Entrevista Neiva.

¹² Entrevista Florencia.

IV. Recursos y retos para el posconflicto

El trabajo de campo en la región permitió identificar una amplia variedad de recursos y experiencias que se han desarrollado a pesar del conflicto, y son insumo para la consolidación de escenarios duraderos de paz en el postconflicto. Así mismo, permitió identificar algunos retos que deben ser tenidos seriamente en cuenta para el logro de una paz duradera. En esta sección se presentan los resultados principales arrojados por el trabajo de campo para la región.

Estos se refieren al papel que la sociedad civil, el estado, el sector productivo y la interacción entre los tres han jugado en el conflicto y lo deberán hacer también en el posconflicto. Con esto en mente, los resultados

están divididos en tres partes. La primera se refiere a tres asuntos relacionados con el fortalecimiento de la sociedad civil, como recurso clave para el posconflicto. Esta contiene reflexiones relacionadas con el papel de las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales y los gremios, y algunos aspectos que se requieren fortalecer en cuanto a la cultura de paz en la región. La segunda tiene que ver con dos asuntos que suscitan grandes debates en la región, en los que el estado local, regional y nacional se debe ocupar con urgencia: el ordenamiento territorial y la definición de una política de seguridad y convivencia donde la fuerza pública vele por los derechos de todos los ciudadanos. Por último, se plantea en el tercer apartado algunos retos relacionados con las visiones de desarrollo que existen en la región, lo que incluye las demandas de inversión social y la pugna entre economías extractivas y agrícolas.

GRÁFICA /01

Estructura, recursos y retos para el postconflicto en la región Huila y Caquetá



Fuente: Elaboración FIP.

4.1. La sociedad civil en el postconflicto

4.1.1. La justicia comunal y el postconflicto

Uno de los hallazgos más importante durante el año de trabajo sobre las capacidades institucionales para la paz fue el papel que desempeña el poder comunal en los territorios donde hacen presencia las FARC, en la administración de justicia comunitaria. Dicho papel va en doble vía: por un lado es un mecanismo de instrumentalización de las FARC para ejercer control social, aunque este poder comunal va ganando cada vez mayor independencia. Por otro, es un mecanismo que goza de legitimidad social, pues sus aportes en la regulación de los conflictos y en el desarrollo de proyectos locales es reconocido por las comunidades. Por esto, uno de los asuntos clave en el postconflicto será tener en cuenta el poder comunal para el trabajo con las comunidades.

En la zona rural del Caquetá, especialmente en la de municipios como San Vicente del Caguán, La Montañita, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y Solano, las FARC intervienen ostensiblemente en la mediación de conflictos sociales, así como en Algeciras, Colombia, Tello y Baraya, del departamento del Huila.

Todo parece indicar que la ruralidad de estos municipios, la tradición de presencia de la guerrilla de las FARC, y con ello un cierto linaje familiar en este grupo insurgente (abuelos, tíos, primos en las filas de las FARC), sumado a un proceso de informalidad de la economía y la propiedad, ha hecho que a pesar de la fuerte intervención militar en terreno por parte del Gobierno nacional desde el 2002, las FARC aún continúen con un fuerte control social en las zonas rurales. En todo caso esta interferencia no es estable en el tiempo. A grandes

rasgos se puede hablar de dos momentos. El primero se dio entre 1997 y 2005, y en algunas zonas se prolongó hasta el 2009. Básicamente las FARC tomaban las decisiones sin consultar a la comunidad, lo que llevó a grandes desmanes. Una entrevista en Neiva manifiesta: *“en el año 2009 hacían ‘limpiezas sociales’, intervenían en peleas matrimoniales, pago de deudas, cuando existía un comandante llamado ‘El Mocho’”,* pero desde que este fue asesinado alrededor del 2009¹³, ya no se acostumbra la intervención de las FARC en estos casos, en zonas rurales o más cercanas a Neiva.

En Florencia hay una similar situación y con fechas cercanas en las que ha variado el control social de las FARC, aunque todavía se sabe de la presencia regulatoria de estas en zonas rurales como El Pará, Norcasia, Año Nuevo y El Chontaduro. Un entrevistado recuerda transformaciones en el rol regulatorio de la guerrilla en Florencia, así: *“No permitían el chisme como práctica fuerte hasta hace unos cinco años (2009). Ellos no dejaban que en caseríos o inspecciones se estuviera bebiendo en días laborables, más bien los castigaban con ponerlos a trabajar en alguna obra que ellos estuvieran haciendo o multándolos económicamente. Ya esto se dejó de hacer”*¹⁴.

El mismo entrevistado evaluó positivamente otras prácticas generales de las FARC que ya no se presentan: *“Antes la guerrilla mataba primero y después preguntaba, especialmente entre 1998 y 2005. Desde 2005, ahí al menos se puede entrar a dialogar con ellos, para solucionar los problemas de manera más civilizada. Antes no se llamaba a nadie para contrastar versiones, y se usaba la delación o la acusación para quitarse de encima rivales comerciales, económicos, sociales”*¹⁵.

Desde 2005 la situación comenzó a cambiar, derivado al menos de dos circunstancias: por un lado, la forma autoritaria de administrar justicia provocó una

...

¹³ Entrevista Neiva.

¹⁴ Entrevistas Florencia.

¹⁵ Entrevistas Florencia.

verdadera cacería de brujas, pues solo con un rumor las FARC actuaban y ello debilitó fuertemente su base social. Por otro, la fuerte presión de la fuerza pública no las hizo tan estables en el territorio. En todo caso, como se dijo antes, el alcance de la intervención en temas sociales locales es amplio y diferenciado. En algunas zonas tienen el control sobre la explotación de flora y fauna, por ejemplo, prohíben la deforestación. En las relaciones interpersonales, las disputas entre vecinos son censuradas. Además, restringen el movimiento libre de la gente – personal nuevo que desee ingresar al territorio necesita una recomendación del presidente de la JAC de su lugar de residencia anterior, y nuevos profesores requieren de un permiso para trabajar en sus zonas de mayor influencia¹⁶.

Así las cosas, desde 2005 la administración de justicia comenzó a ser delegada a las JAC y desde allí, en algunas zonas las FARC ejercen cierto control. El protocolo para la solución al conflicto mediado por estas es presentado para un caso en zona rural de San Vicente del Caguán, que ejemplifica la metodología empleada y que es la que rige actualmente: “Cuando hay un lio se cita a la JAC, y un comité de conciliación. Ellos saben que es mejor arreglar por las buenas, porque si no hay que remitirlo al comandante de zona. [...] Se escuchan los descargos y se busca llegar a un acuerdo, y si no tiene con qué pagar, a usted le recogen los animales y paga con animales. El tesorero de la JAC es quien hace la valoración en conjunto con el dueño de los animales. [...] Hacen [las reuniones] en las escuelas interfiriendo o afectando la jornada escolar, y a veces los helicópteros sobrevuelan porque ve el gentío reunido. La deliberación y presentación de cargos y descargos es aparte de la sala de reuniones, y ahí mismo deciden. Se hace un

acta y queda por escrito como archivo de la JAC, todos los comités manejan archivos [conciliación, trabajo, delegados]”¹⁷.

La autonomía de los miembros de la comunidad en la solución de sus propios problemas de convivencia es limitada: “Las comunidades tienen que hacer lo que digan los miembros de las FARC, como solución al conflicto en que intervienen”¹⁸. A menos que opten por no dejar escalar el problema, o no lo pongan en conocimiento de la guerrilla.

Luego de conocida una situación por la guerrilla de las FARC, los mecanismos y procedimientos de administración de justicia que utilizan en la zona consisten en que al detectarse la existencia de un problema, “[...] hacen subir a las dos partes ante el jefe de grupo o comandante y cada cual expone su inconveniente y la determinación o la solución la toma el comandante o jefe que esté ahí. Regularmente son multas económicas o, si es grave, puede haber destierro. Se asesina a alguien si hace caso omiso de destierro o tienen indicios de que de pronto esas personas pueden estar aliadas o confabuladas con los organismos de seguridad del Estado”¹⁹.

La legitimidad de estos mecanismos o instrumentos usados por las FARC en la sociedad es diferenciada. Algunos ven en ello un abuso frente al que no tienen opción “porque la gente vive sometida como población civil, y obedece porque no tiene otra alternativa. Si fuera por ellos, no atenderían a estas soluciones”²⁰. Otros, si bien no están de acuerdo, valoran su eficiencia y eficacia: “Por lo general el 90% no está de acuerdo, pero el hecho de estar en la región y desprotegido del Estado deben cumplir las normas. Y la gente es consciente de que sus problemas se resuelven efectivamente en la zona”²¹; mientras que otros legitiman los medios usados

por las FARC y los resultados al señalar que “(...) los problemas en la vereda nunca los tratamos con el defensor o con el Estado, porque nunca dan una solución efectiva, por eso siempre uno los busca a ellos [FARC], porque ellos sí hacen cumplir las normas y no se dejan mamar gallo. Si incumplen [la] multa, la gente debe irse. Son mecanismos más efectivos”²². Incluso algunos funcionarios entrevistados hablan de su aprobación al rol justiciero de la guerrilla, y ven en la función de las FARC una descarga en sus labores.

Lo cierto es que en la mayoría de las zonas donde la guerrilla de las FARC mantienen un dominio importante, esta institucionalidad paralela funciona. Las inspecciones de policía son limitadas y no cuentan con los recursos necesarios para funcionar. Además, instituciones como casas de justicia y comisarías de familias generalmente son inexistentes en zonas rurales, y poco eficientes en los cascos urbanos.

No obstante, en algunos municipios de la región las JAC gozan de amplia legitimidad sin tener el respaldo de las FARC, ya sea porque han logrado independizar sus acciones de la guerrilla, o porque han ejercido actos de negociación o resistencia contra ellas. Un ejemplo de esto se refleja en el siguiente testimonio dado en una entrevista en El Doncello, Caquetá: “En 1997, en una comunidad, la guerrilla llegó donde el presidente de la JAC a preguntarle qué problemas tenía la comunidad para ayudarle a solucionarlos. [...] la comunidad se reunió atemorizada, frente a la reunión de la guerrilla y frente a esa pregunta del grupo insurgente, el presidente de la JAC respondió: ‘aquí tenemos muchísimos problemas, pero aquí también tenemos la capacidad de solucionarlos’. [...] el comandante se quedó callado mirándolos a todos, mientras la gente temerosa pensaba cómo iba a

responder este señor, y el comandante respondió: ‘los felicito, porque esta es una comunidad organizada y no tenemos nada más que hacer aquí’. En ese momento se despidieron. Eso impactó a la comunidad porque tener el valor de pararse frente a ellos y decirles ‘tenemos problemas, pero no los necesitamos aquí’, es algo de resaltar y afortunadamente eso sirvió para que no estuvieran molestando”.

Esto se evidencia también en algunas experiencias de paz identificadas por los actores consultados. Es el caso de los “Gestores Humanitarios” de Tello, Huila. Estos son campesinos y campesinas productores, miembros de JAC, que cansados de la vulneración de sus derechos por parte de los actores armados, decidieron sacar tiempo del trabajo en sus fincas para asistir a capacitaciones ofrecidas por Plataforma Sur de Procesos Sociales con el objetivo de generar normas de convivencia en sus comunidades, mediar en los conflictos comunitarios y velar por sus derechos.

En conclusión, la justicia comunal y comunitaria en las zonas rurales goza de legitimidad social entre los actores, en muchos casos aun cuando su trabajo esté soportado en el poder de las FARC. Esto se debe a que estos mecanismos de regulación de conflictos han reemplazado la justicia ordinaria en sitios donde la presencia estatal es mínima o no es eficiente.

4.1.2. Activismo social en la región: un recurso para la paz producto del conflicto.

Otro gran hallazgo de la investigación se relaciona con la identificación de diversas expresiones organizativas de la sociedad civil que han aparecido como una externalidad positiva del conflicto. La región cuenta

¹⁶ Entrevista, Florencia.

¹⁷ Entrevista San Vicente del Caguán.

¹⁸ Entrevista San Vicente del Caguán.

¹⁹ Entrevistas Florencia.

²⁰ Entrevistas Florencia.

²¹ Entrevista El Doncello.

²² Entrevista Colombia.

con un amplio número de organizaciones sociales, entre ellas asociaciones, gremios, organizaciones de base, entre otros, que han surgido como medio de resistencia a la violencia o como forma de subsanar la pobreza y las deficiencias estatales presentes en la región. Las comunidades identifican en sus organizaciones uno de los principales recursos, por lo que se debe trabajar con ellas en su fortalecimiento, en su integración al diseño de las políticas públicas y tenerlas como grandes aliadas para el postconflicto.

Movimiento social

La fuerte dinámica del conflicto armado que ha vivido la región les ha dado paso a las organizaciones y a los movimientos sociales para que no solo abanderan luchas reivindicativas, sino también de carácter político e ideológico. Por tanto, el movimiento social ha estado presente a lo largo y ancho de la historia de la región, lo que lo convierte en interlocutor válido e importante de cara al postconflicto. El movimiento de defensores de derechos humanos también ha tomado fuerza, pues se ha encargado de visibilizar la delicada situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario que ha cobijado a la región, y ha acompañado a las comunidades en temas jurídicos y de atención psicosocial.

El movimiento social y la organización social y comunitaria en la región han obtenido significativos logros, como el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina del Pato, luego de que en 1997 diferentes JAC, posteriormente reunidas en la Asociación de Colonos del Pato (AMCOP), *“entra a negociar con el Gobierno y afortunadamente logra[mos] que a las personas se les resolviera el tema de la tenencia de tierras en*

el sector Balsillas, que es un valle con unas 8 mil hectáreas que pertenecían a una o dos personas; allí se les resolvió la tenencia de tierras a unas 110 familias. A ellas se les entregaron parcelas de catorce hectáreas, aproximadamente, con vivienda y con subsidio para tener su ganado, porque es ganadero todo ese sector”. (Asociación de Colonos del Pato)

Otro caso significativo es la constitución de los Consejos de Paz, municipales y departamental en el Huila, como espacio de convergencia del Estado y la sociedad civil, que sirvieron como órgano asesor y consultivo de las administraciones municipales. Así mismo, está la constitución de la Asamblea Municipal Constituyente en el municipio de Rivera en el 2005, que nace como respuesta de la sociedad civil al incremento de la violencia en el municipio y como espacio importante para promover la participación ciudadana. Más recientemente está la declaración de Algeciras como Laboratorio de Paz mediante ordenanza número 010 de la Asamblea Departamental, con la intención de focalizar esfuerzos y recursos para la paz en uno de los municipios más golpeados por el conflicto en el Huila. (Diario del Huila, 2014)

En el Caquetá, un caso para analizar es el de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas de Caquetá – Coordosac, del que se comentará más extensamente en lo que sigue de este apartado. Otro es el de Unios: la Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán. Un importante número de organizaciones del municipio la integran, lo que la convierte en una de las organizaciones sociales más fuertes del Caquetá²³. Unios ha desempeñado un papel importante en el posicionamiento de la salida negociada al conflicto y es una de las aban-

deradas en la lucha contra la explotación minera y la entrada de inversión extranjera a la región.

Una de sus grandes victorias es haber ganado la actual alcaldía de San Vicente del Caguán. El alcalde, Domingo Emilio Pérez Cuéllar, fue presidente de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, una de las organizaciones que conforman Unios. Llegó a la alcaldía con el aval del Polo Democrático Alternativo, obteniendo la que es considerada una votación histórica: 5.925 votos, perdiendo solo en tres mesas ubicadas en la zona rural.

Teniendo en cuenta que la región mantiene vivo el recuerdo del exterminio de la Unión Patriótica, este es un caso que muestra que es posible hacer política desde las bases en la región sin pertenecer a los partidos tradicionales. El caso ha dado esperanza a personas y organizaciones con ideologías de izquierda, que han estado tradicionalmente por fuera de la política, y ha motivado el surgimiento de nuevos liderazgos en la región que confían hoy un poco más en las instituciones y la democracia.

Sin embargo, Unios ha estado marcado por el estigma que pesa sobre las organizaciones de izquierda y alternativas en la región, y una historia de sobreintervención poco efectiva que los ha llevado a exacerbar los deseos de independencia del estado nacional y a radicalizar su proyecto político, para la consolidación de una identidad regional que reivindique al Caguán como una zona que ha estado al servicio de la paz, pero que entra en choque con otras ideas de región que hay en el departamento. Esto es lo que algunos en la región llaman el deseo de *“caguanización”* del Caquetá por parte de Unios. Para algunos, esto se debe a la afinidad ideológica de su proyecto político con el de las FARC, que ostentan una gran aceptación en la región, razón

por la que algunos lo asocian con el grupo guerrillero al punto de considerar a las FARC como el brazo armado de la alcaldía. Muchos otros consideran que decir esto es contribuir a la estigmatización de los movimientos sociales, y explican la polarización más como una consecuencia de una historia marcada por el abandono estatal.

El reto entonces es construir un relato de nación para el posconflicto, que convoque a ideologías diferentes, que desde las organizaciones sociales y desde los poderes locales se sientan también Estado y aporten al mejoramiento de toda una nación (no solo de un territorio). La entrada de estas nuevas fuerzas a la política, surgidas de organizaciones sociales de base, tiene el reto de no caer en los mismos vicios en los que han caído sus antecesores de partidos tradicionales, como la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y el cerrar el espacio de participación a otras ideologías. De algunas de estas cosas se queja la población frente a Unios y a la alcaldía, sobre todo de la imposibilidad de participar si se es de la oposición.

En conclusión, es de resaltar la capacidad de autogestión, de participación y de producción de las organizaciones sociales en la región. Así mismo, la investigación reveló que cuentan con altos niveles de legitimidad y sus acciones son asociadas positivamente por las comunidades con la construcción de paz. Sin embargo, muchas luchan con estigmas, fruto de que su misma resistencia ha hecho que las asocien con la guerrilla. Así mismo, para lograr mayores niveles de incidencia deben generar un propósito común en torno de la paz a pesar de las diferencias ideológicas o de foco. Pero tal vez lo más importante es que requieren ser más escuchadas y poder tener mayor incidencia en la construcción de políticas públicas, lo que está relacionado con

...

²³ Entre las organizaciones que la integran están: Juventud Red Compaz, Corporación Caguán Vive, Asociación de Cabildos Indígenas (Acisv), la Asociación Municipal de Colonos del Pato (Amcopol), la Asociación Ambiental del Bajo Pato (Asabp), la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), Red de Mujeres de San Vicente del Caguán, entre otras.

el reto de reconciliación para generar confianza entre el Estado y las organizaciones sociales.

Organizaciones productivas

Los movimientos sociales en la región se empezaron a gestar desde las luchas agrarias indígenas, a finales de 1800, “cuando el líder Quintín Lame, amparado en la Ley 89 de 1890, logró que se reconocieran los cabildos indígenas en Ortega y Chaparral (Tolima)” (PNUD, 2010, pág. 11). Los despojos a campesinos e indígenas y la alta concentración de tierras en pocas manos llevaron a la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), la cual desempeñaría un papel central en la organización campesina en la región en la segunda mitad del siglo XX, y continúa aún activa en municipios como Rivera.

Por otra parte, en el Caquetá, Coordosac cumple una función importante como movilizador social. Hoy está conformado por 112 organizaciones campesinas y de Derechos Humanos, y según Pares, 2014, es la organización más importante de la Marcha Patriótica -MP- en el Caquetá. Hasta el 2010 “Coordosac hacía parte de otras organizaciones a nivel nacional, como la Coordinadora Nacional Agraria Popular (Conap) y Fensuagro (Federación Sindical Unitaria del Agro), que junto a otras organizaciones crearon la MP” (Pares, 2014, pág. 32). Su origen también está ligado a la organización comunal que se empezó a gestar en Cartagena del Chairá, como alternativa a un estado poco legítimo. En la marcha por la paz del 2010, en parte gracias a Coordosac, “salieron a marchar 6.500 personas en el municipio de Florencia” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Esta marcha hizo que muchos estigmatizaran a MP, asociándola con las FARC. Sin embargo, “la Marcha Patriota niega cualquier ligazón orgánica con las FARC,

y más bien se considera como el ‘brazo político’ de un conjunto de organizaciones sociales y populares. Esta organización está integrada por más de dos mil organizaciones en veinticinco departamentos del país” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 326).

Por otra parte, las comunidades, en algunos casos bajo la influencia de las FARC, en otros como respuesta a los programas de sustitución de cultivos ilícitos impulsados por el Gobierno nacional y, en menor medida, por las gobernaciones, han gestado una gran diversidad de gremios y asociaciones productivas de productos como cacao, café, caucho, frutales, pesca, ganado, entre otros. En el trabajo de campo, un buen número de las experiencias de paz, identificadas por los participantes, se referían a proyectos realizados por este tipo de asociaciones, en beneficio de sus asociados. Por ejemplo, son de destacar la del comité de caucheros de El Doncello, con 18 años funcionando y agrupa a 130 familias productoras de caucho, muchas de las cuales reemplazaron el cultivo de coca por el del caucho, gracias a los proyectos de apoyo gestionados por el comité. Una experiencia similar es la de Chococaguán, un proyecto gestado por la parroquia de Remolinos del Caguán con 30 familias, que dos años más tarde se convertirían en el Comité de Cacaoteros de Remolinos del Caguán. En el 2004 esta experiencia recibió el Premio Nacional de Paz como un reconocimiento al esfuerzo de sus asociados de mantenerse como una opción alternativa a la ilegalidad y sobrevivir en medio del conflicto. Otro ejemplo de ello es la Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá (Asoheca), que desarrolló un proyecto en la vereda Maracaibo 2, jurisdicción de Río Negro, que llevó a 30 familias a reemplazar los cultivos de coca por cultivos lícitos. Los pobladores ven en este tipo de experiencias casos exitosos de construcción de paz en la región, no

solo porque traen consigo opciones legales de subsistencia, sino porque generan capital social entre los asociados y beneficiarios que redundan en bienestar para las familias y pobladores de las zonas.

Organizaciones de jóvenes

Otro recurso social importante son las organizaciones juveniles que se han gestado en la región. A pesar de la pobre oferta educativa con que cuenta la región y los altos niveles de desempleo, existen en la región diversos grupos juveniles que han surgido gracias al trabajo de organizaciones no gubernamentales y, en menor medida, a apoyos estatales. Generalmente, estas organizaciones se enfocan al fortalecimiento de la participación de los jóvenes en las esferas públicas y en la oferta de espacios de expresión y desarrollo vocacional.

Ejemplo de esto es la Asociación de Jóvenes de Río Negro, en Puerto Rico, que desarrolló el primer festival Río Paz en 2014 en memoria de un atentado que tuvo lugar en la zona el 27 de abril de 2012 y que ocasionó la pérdida de tres vidas. Gracias al apoyo de la JAC y de la REDCaquetáPaz, la asociación cuenta con una Casa del Joven en la que hay aproximadamente 40 jóvenes inscritos. En este mismo sentido, es de resaltar la experiencia de los Festivales de Juventud del Huila. Una iniciativa que busca construir espacios para que los adolescentes se encuentren a dialogar y a compartir experiencias artísticas y culturales alrededor de temas como calidad de la educación, paz, organización juvenil, oportunidades y condiciones laborales de la juventud, entre otros.

Los retos acá están en encontrar formas de potenciar estas experiencias y hacerlas extensivas a todos los jóvenes de la región. Así mismo, es necesario generar

mayores oportunidades de incidencia y de fortalecimiento de nuevos liderazgos juveniles, lo que requiere la generación de oportunidades reales, laborales, de estudio y de uso del tiempo libre para los jóvenes. Adicionalmente está el reto de ofrecerles oportunidades para su agremiación de forma independiente a partidos políticos o ideologías políticas. Este punto es crítico, en tanto que se observa en zonas como San Vicente del Caguán cómo las FARC han capitalizado a su favor la falta de oportunidades de participación y agremiación para influenciar los adolescentes de la región.

Organizaciones de víctimas

El accionar de los grupos armados en el territorio y la desidia estatal han generado en esta región, como en todo el país, unos altos porcentajes de víctimas, hacia quienes el Gobierno ha dirigido acciones tendientes a su atención y reparación integral. En el territorio se han logrado conformar espacios de participación para las víctimas, por ejemplo, mediante las mesas de víctimas, las cuales están constituidas en todos los municipios priorizados y cuentan con una activa participación en la mayoría de estos. Además, existen diversas organizaciones de víctimas que luchan por la reivindicación de sus derechos y algunas se han organizado para generar proyectos productivos, los que, sobre todo en el Huila, han sido impulsados por la gobernación.

De resaltar son experiencias como la de Amudel-Huila, una organización reconocida por su participación activa en la Mesa Municipal de Participación de Víctimas del departamento (PNUD, 2010), o Asodefuturo en Puerto Rico, una organización de población víctima del conflicto que adelanta acciones tendientes a la formación en derechos de esta población y al apoyo en su exigibilidad.

Estas organizaciones, aunque cada vez más fuertes y numerosas, demandan del apoyo estatal, sobre todo, en lo relacionado con la agilidad en el restablecimiento de sus derechos y en el desarrollo de alternativas productivas. Sin embargo, se enfrentan a la incapacidad estatal para atender la compleja diversidad y cantidad de casos. Algunas también resienten ver diferencias en la agilidad de la atención a víctimas de las FF.MM. vs. víctimas campesinas: *“Las víctimas recogen un universo enorme que no se ha atendido integralmente, por la desprotección del estado, ya que se brinda mayor atención a las [víctimas] que están en el rango militar”*²⁴.

En algunos casos personas que no son víctimas directas del conflicto ven en esta condición una opción para el mejoramiento de sus realidades, por eso, se aprovechan de la situación de conflicto armado en la región, y se declaran como víctimas ante el Ministerio Público, por lo que terminan siendo asumidas como tal por el Estado, logrando beneficios por acciones de reparación.

Por esto, la población víctima manifiesta que están en dos situaciones encontradas, generadas por el mismo Gobierno nacional y el proceso de inclusión de las víctimas en el registro único. Por un lado, está el sobreregistro de víctimas que realmente no lo son: *“hay un gran número de personas que se registran como desplazados, pero en realidad [no lo son]. Por eso debería de haber seguimiento y control para establecer la veracidad de las declaraciones”*. Pero, por otro, está el subregistro de las verdaderas víctimas. Aquellas que por diferentes motivos, sobre todo relacionados con la poca comprensión del conflicto y de la geografía nacional por parte de algunos funcionarios públicos, no acuden al sistema o al acudir sus declaraciones son toma-

das por falsas por lo que no son incluidas en el Sistema de Registro Único de Víctimas (SUV) y, por tanto, no son cobijadas por las acciones tendientes al restablecimiento de sus derechos.

A esto se suman las demandas de algunas personas de las comunidades que piden al Estado una revisión de las ayudas dirigidas a víctimas frente a las encauzadas a las personas en situación de pobreza. Estas diferencias están generando tensiones entre las dos poblaciones y resistencia de parte de las comunidades a las víctimas directas del conflicto. Frente a esto, muchos pobladores critican el sistema de subsidios y argumentan que más que eso, se requieren garantías de derechos básicos para la población en general que vive en los lugares más afectados por el conflicto. *“El Estado tiene que brindar oportunidades a la población para mejorar su calidad de vida, pero no regalando subsidios que lo único que hacen es generar una mentalidad de miseria”*²⁵.

Organizaciones de mujeres

Las organizaciones femeninas son comunes en la región. Algunas han nacido de grupos de mujeres interesadas por mejorar sus condiciones de subsistencia. Otras de organizaciones que al verse solas frente a las responsabilidades del hogar, luego de perder a sus hombres en el conflicto, decidieron unirse con el propósito de gestionar proyectos de reivindicación de derechos o productivos. El que muchas familias hayan quedado sin hombres, ya sea porque han muerto, desaparecido o porque forman parte de alguno de los grupos en conflicto, ha llevado a una reconfiguración del papel de la mujer en la región.

Un caso importante es la Asociación de Mujeres por

la Paz de Algeciras (Asomupaz), que agrupa a 40 socias con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y la de sus familias. En esta organización convergen, entre otras, víctimas de las operaciones militares Aurora y Reflejo, que pretendían capturar a más de 200 *“auxiliares”* que el entonces comandante de la Fuerza de Tarea Algeciras, el coronel Mario Hernández, afirmó vivían en este municipio. La organización ha logrado reconocimiento municipal por su lucha constante por los derechos de las mujeres y por su capacidad organizativa. Además desarrolla un proyecto productivo denominado *“Despulpifrut”*, con el propósito de comercializar pulpa de fruta y así contribuir al bienestar económico del municipio y de sus hogares.

El empoderamiento femenino a través de las organizaciones de mujeres es un paso importante hacia la equidad de género en la región, aunque no el único. En relación con las violencias de género, el Huila reporta un incremento de la violencia hacia la mujer, de acuerdo con la información recopilada mediante el seguimiento y monitoreo de la Ruta de no violencia hacia la mujer, una iniciativa liderada por diversas organizaciones sociales e instituciones gubernamentales del departamento. Según el sistema de seguimiento y monitoreo de la Ruta de no violencia contra la mujer (Sivigila), que lleva la Secretaría de Salud departamental: *“de los casos [de violencia] reportados por el sistema, el 63% correspondió a las mujeres, en 2012 los casos llegaron a un 83%, y en el 2013 hasta el mes de octubre se reportaron 2.484 correspondiendo a las violencias contra las mujeres el 84%”* (Gobernación del Huila, Fundación del Alto Magdalena, PNUD y Cooperación Casa de la Memoria Quipu Huasi, 2014, pág. 44). A esto se suman diversas manifestaciones de inequidad y violencia de género

que se acentúan por el conflicto armado: *“Florencia, al ser receptores de víctimas, viene sufriendo por un aumento de prostitución y trata de blancas internas en el departamento. Se da también el matrimonio servil y esto facilita muchos tipos de violencia contra las mujeres”*²⁶.

El Huila adoptó recientemente la política pública de género, producto de un trabajo colectivo de organizaciones sociales de mujeres, ONGs e instituciones del Estado, en la que la población tiene fincadas sus esperanzas, pues esperan que contribuya a erradicar progresivamente las violencias contra la mujer y garanticen la equidad de género. Entre otras acciones, es de gran importancia la inclusión de las organizaciones de mujeres en la construcción de políticas públicas, así como en la veeduría del cumplimiento de las políticas encaminadas a la equidad de género.

Así, los movimientos sociales, las organizaciones productivas, las de jóvenes, víctimas y mujeres son un activo social que se debe tener en cuenta en el postconflicto para la consolidación de una cultura de paz en la región.

4.1.3. Postconflicto y cultura democrática

Uno de los mayores retos del posconflicto será la consolidación de una cultura de paz en el país. Las diversas organizaciones sociales, los actos de resistencia y la entrada a la contienda política de nuevos actores en la región muestran avances significativos en ese sentido. No obstante, la misma población reclama el fortalecimiento de la cultura de paz, pues hay conciencia del impacto que ha dejado la guerra en la forma de tramitar los conflictos, las demandas sociales y las diferencias. Esto se mezcla, con debilidades sentidas por la pobla-

²⁴ Diálogo, subregión 4.

²⁵ Diálogo, subregión 2.

²⁶ Entrevista Florencia

ción en cuanto a la cultura democrática. Sin pretender equiparar cultura democrática con cultura de paz, es un reto el fortalecimiento de ambas dimensiones para poder alcanzar un posconflicto exitoso y un proyecto de nación incluyente.

El conflicto ha dejado claras secuelas en vidas, en infraestructura y en desarrollo económico. Sin embargo, uno de los mayores impactos está en la cultura. Es decir, en la forma que las comunidades afrontan los problemas y las diferencias, y visualizan posibilidades para su solución pacífica. En este sentido, el conflicto armado ha profundizado el imaginario de que la violencia es una vía idónea para el logro de la justicia social. Muchos de los pobladores justifican la violencia por las carencias económicas y las inequidades sociales que sufren: *“La violencia es el resultado de la realidad social. Yo cómo le voy a pedir a una familia que tiene cinco hijos y que de esos hijos tres ya son de 13, 14, 18 años y que viven aguantando hambre, que no roben si el Estado no le da condiciones a la población para que vivan dignamente”*²⁷. Esto los lleva a pensar que se justifica que la violencia continúe, mientras no se subsanen las inequidades sociales en la región. Teniendo en cuenta el gran saldo desfavorable que existe en la zona, frente a la satisfacción de necesidades básicas, es de prever que pasará al menos una década hasta que estas se subsanen. El que las comunidades piensen que no habrá paz hasta que no haya justicia social lleva a pensar en el gran riesgo en el que se encuentra el territorio de continuar usando la violencia como vía de lucha por la reivindicación de derechos.

Aunque existe una cultura de justificación de violencia, un recurso fundamental es que la gente visione y demande formación a las comunidades para que aprendan a resolver sus propios conflictos sin tener que

acudir a los grupos alzados en armas. *“Sueño con capacitación a las personas, especialmente de la zona rural, para que aprendan a expresarse, a vivir en paz y a solucionar sus diferencias sin necesidad de acudir a otros actores fuera de ley”*²⁸.

Otro complejo residuo del conflicto es la alta estigmatización que sufre hoy la región, y en ella sus pobladores y organizaciones. En los testimonios recogidos se hizo recurrente el estigma como una dura huella que sienten los habitantes de los municipios consultados. Un joven entrevistado relató cómo uno de sus recuerdos de infancia se relacionaba con su madre diciéndole que nunca admitiera que venía de Puerto Rico. O como en Hobo las personas que tienen algunos recursos económicos prefieren tener a sus hijos en Neiva, porque no quieren que ellos lleven en sus tarjetas de identidad el sino de su pueblo de nacimiento. Este estigma se justifica en la desconfianza manifiesta por parte de las autoridades públicas frente a los habitantes de estos municipios, especialmente a las organizaciones sociales; así mismo en los diversos abusos que ha cometido la fuerza pública contra la población civil, amparada en los supuestos de colaboración entre la población civil y las FARC: *“Las fuerzas militares en mi región muchas veces son muy autoritarias y abusan de ellos, así la comunidad no los ve tan bien”*²⁹.

El estigma que sufre la región ha sido, en algunos casos, un desincentivo para la organización social y para la inversión local. Lo anterior se relaciona también con el entendimiento de la *“paz territorial”* como una vía para reducir la interferencia de la nación en la región y no como una oportunidad para construir un proyecto de nación. En San Vicente del Caguán, la población siente que su sacrificio por la paz, durante las frustradas negociaciones entre el Estado y las FARC, en vez

de haberse traducido en beneficios para la región, los dejó aún más empobrecidos y estigmatizados. Esto genera una suerte de deseo de independencia del centro, que se refuerza por la debilidad institucional, el incumplimiento sistemático de los acuerdos del Gobierno nacional con las comunidades, y la ausencia de coordinación entre las instituciones del orden nacional.

Por otra parte, muchos de los actores identifican con preocupación una baja cultura democrática en la región, reflejada en la imposibilidad de escuchar, respetar o acoger diferentes propuestas e ideologías. Un reto para el postconflicto será el fortalecimiento de las capacidades de diálogo de los actores, como vía de prevención de futuras conflictividades que terminen en actos bélicos.

En relación con la cultura política, las comunidades identifican los actos de corrupción de los agentes del Estado como el principal problema al que se tienen que enfrentar, y que es necesario, así como urgente superar para garantizar que los procesos de transformación se den con éxito, indistintamente de si es en el marco del postconflicto o no. Para la eliminación de la corrupción, consideran que el *“fortalecimiento de los órganos de control e independencia es un elemento fundamental”*³⁰, pero además que es importante que *“quien ejerce el control disciplinario fiscal sea elegido popularmente”*³¹. Algunos, la asocian a las condiciones económicas en las que se encuentran los municipios de sexta categoría, y consideran que la falta de recursos con que cuentan los municipios justifica el clientelismo y el beneficio individual: *“justifican la corrupción de los funcionarios públicos por los bajos ingresos salariales y el exceso de funciones que tienen”*³².

Mientras en el Huila *“esperan que haya nuevos partidos políticos con todos los derechos y se tengan en*

*cuenta las minorías para que haya igualdad social”*³³, en San Vicente del Caguán hablan de *“reducción”*, pues consideran que hoy existen muchos de ellos que responden a la misma ideología *“capitalista neoliberal”*, que están agrupados no por ideologías sino por caciques y eso le resta posibilidades a los partidos de oposición.

Generalmente, las organizaciones sociales son conscientes de la huella que ha dejado el conflicto en su cultura de paz. En este sentido, un recurso adicional son las diversas experiencias de paz que demuestran que es posible para las comunidades llegar a acuerdos y cumplir normas de convivencia por vías no armadas. *“En los territorios existen normas que son reconocidas y respetadas y no necesariamente porque las imponga la guerrilla, sino porque han sido formas de regular la vida cotidiana”*³⁴.

También lo son las experiencias en educación para la paz, en diversos ámbitos, promovidos en redes de pobladores a través de organizaciones como HuiPaz y la RedCaquetáPaz. Hay también algunas experiencias escolares interesantes, como la de la Institución Educativa La Vega, del municipio de Campoalegre, que busca promover la solución pacífica de conflictos desde el preescolar, a través de la formación de niños como *“jueces de paz”* que colaboran y orientan a sus compañeros en busca de soluciones pacíficas e informan a los docentes de las pugnas que surgen entre los estudiantes.

Existen también experiencias que muestran formas de promover una cultura de paz desde el uso del tiempo libre. Un caso emblemático es la de los Círculos de lectura infantil y juvenil que vienen siendo promovidos desde 1997 por el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán y Puerto Leguizamo para *“desarmar la mente y el corazón de niños y niñas y su comunidad,*

27 Entrevista Apiciativa, San Vicente del Caguán.

28 Entrevista Apiciativa. Subregión 1.

29 Entrevista Sociedad Civil, Neiva.

30 Entrevista, Huila.

31 Diálogo, subregión 3.

32 Entrevista, Subregión 1.

33 Diálogo. Subregión 1.

34 Entrevista apiciativa. Huila..

tradicionalmente inmersos en diferentes tipos de violencia (intrafamiliar, escolar, comunitario, local, grupos armados, entre otros), para dar paso a una cultura de paz que logre el desarrollo integral de sus participantes y la comunidad” (Círculo de Lectura, 2015). Se calcula que cerca de 12.000 niños, niñas y adolescentes han pasado por esta escuela de la paz, en la que en una reunión de dos horas una vez por semana, los niños leen, dibujan, dramatizan cuentos y escriben sus propias historias que son leídas en la emisora local” (El Tiempo, 2007). Este proyecto, que obtuvo el Premio Nacional de Paz en 2007, ha abierto más de 234 círculos de lectores, y seis regionales (incluida la de San Vicente del Caguán).

Otro tipo de experiencias se orienta a población adulta, como el caso de los Núcleos Solidaricémonos de Florencia, los que nacieron en el 2002 como una estrategia del ICBF para incentivar la solidaridad en el interior de las familias, formar en resolución pacífica de conflictos y en la identificación de casos de violencia intrafamiliar. Por último, están las experiencias que muestran el interés de algunos sectores sociales por consolidar espacios de participación. Un caso interesante es el del Consejo Departamental de Paz del Huila, creado en 1998, como instancia asesora y consultiva del Gobierno en temas de paz. En su momento el Consejo participó de los diálogos del Caguán, y en el 2005, mediante ordenanza 096, pasa a ser el Consejo de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, creando, así mismo, los comités de DDHH y DIH, dando un paso adelante de la nación, que solo hasta el 2011, mediante Decreto ordena implementar el Sistema Nacional de DDHH y DIH.

Estas experiencias y los deseos incesantes de la población por contar con apoyo en la consolidación de una cultura de paz en la región, son grandes recursos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir

estrategias de promoción de la convivencia pacífica en la región.

4.2. El Estado en la región

4.2.1. Conflictos por el uso del suelo

El tema de tierras en la región de Huila y Caquetá es complejo y presenta diferentes problemáticas, que tendrán repercusiones diversas en un periodo de posconflicto. Se podría decir que el asunto de fondo es el uso del suelo. Es decir, así como en todo el país, existe un problema con el ordenamiento territorial. Por ejemplo, un territorio se destina, de forma simultánea, para explotación petrolera, minera, para distribuir en Unidades Agrícolas Familiares, para producción agroindustrial o se conserva como zona de reserva forestal. Estas son las problemáticas que hoy se debaten en esta región del país.

En todo caso se podría realizar una clasificación en tres tipos de problemas. Algunos son sobre conflictos por vocación por el uso del suelo, entre los que se incluyen los temas de mega-proyectos. Los problemas de segundo orden son sobre la formalidad de la tierra y con ello la posibilidad de acceder a recursos de crédito y proyectos productivos. Este tipo de problemas se asocia más al departamento del Caquetá que al Huila. Por último están los temas de concentración de tierra y acceso a mercados.

En cuanto al primer tipo de problemas, el Huila tiene el conflicto más sonado que es la construcción del megaproyecto de la represa de El Quimbo, el que afecta directamente a las comunidades de seis municipios, y que ha levantado apoyo internacional a las comunidades campesinas locales que proponen sustituir el pro-

yecto por una reserva campesina agroalimentaria, y las ha llevado a rechazar otros proyectos de represas que se encuentran en estudio en el departamento. En el Huila también se han dado recientemente grandes movilizaciones cafeteras y agrarias, especialmente, en el sur, con acompañamiento de campesinos del Caquetá.

Otros problemas relacionados con el uso de la tierra, tanto en Caquetá como Huila, están referidos a que hay posiciones sociales, en ocasiones encontradas, en relación con los asuntos de tierras a titular entre indígenas y campesinos. Por una parte, líderes del movimiento indigenista huilense y caqueteño, como otros del país, asumen una identidad en relación con la tierra, que desde el punto de vista de líderes campesinistas entrevistados los excluye, al considerarlos desde el movimiento indígena como sin ancestralidad. Además, los líderes indígenas rechazan la posibilidad de la constitución de Zonas de Reserva Campesina en áreas de posible influencia o interés indígena. Esto ha llevado a cierto distanciamiento y el surgimiento de conflictos horizontales entre campesinos e indígenas.

Dentro de este mismo punto, en el departamento del Huila se conoce un fenómeno que es la compra de tierras por narcotraficantes (aunque baja en comparación con otros departamentos), en 4 de sus 37 municipios, equivalente al 10,8% de sus 37 municipios existentes entre 1980 y 1995 (Reyes Posada, 2009). También se han reportado prácticas de minería ilegal, aunque en menor grado que en otros departamentos, y problemas de desplazamiento y retornos. Igualmente en el Caquetá la compra de tierras por narcotraficantes se hizo en 8 de sus 15 municipios, equivalente al 53% de sus 15 existentes entre 1980-1995) (Reyes Posada, 2009).

No obstante, en años recientes el mayor debate se ha generado alrededor de la explotación minera y petrolera, versus visiones más campesinistas que abogan

por la protección de la zona para la agricultura, y de protección del medio ambiente. Son conflictos abiertos y declarados con compañías explotadoras de petróleo crudo en jurisdicción de San Vicente del Caguán, y a lo largo de las jurisdicciones municipales por donde discurre el trazado de las vías que son usadas para y dañadas por el transporte del crudo, así como entre actores económicos extractivos de recursos forestales y de metales preciosos en zona fluvial del Caquetá. Indirectamente, son conflictos con el Gobierno y la política de desarrollo que fomenta la explotación en estas zonas. Se ha dedicado el apartado 3.3.2 a este tema, por lo que no se extenderá mucho más acá.

En cuanto al segundo problema sobre la formalidad de la tierra se puede hablar de dos líneas de análisis. Por un lado, la informalidad de la propiedad. Esto se ve principalmente en Caquetá, ya que fue una zona de colonización tardía, por lo que mayoritariamente no hay una tradición patrimonial. El otro eje de análisis tiene que ver con el despojo y abandono de tierras producto de la confrontación armada.

Respecto de la protección a los propietarios desposeídos por actores armados, la Unidad de Restitución de Tierras no tiene al 9 de septiembre de 2014 áreas microfocalizadas de intervención o caracterización en el Huila (Unidad de Restitución de Tierras, 2015), aunque sí presenta solicitudes de restitución en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RT-DAF), con corte al 31 de diciembre de 2013, en el que figuran 497 solicitudes equivalentes al 0,92% del total nacional, y que representan 18.450 ha que son solicitadas para restituir en el Huila (Unidad de Restitución de Tierras, 2014).

En cuanto a la restitución a propietarios o poseedores afectados por la acción de grupos armados ilegales en el Caquetá, la Unidad de Restitución de Tierras tam-

poco tenía al 9 de septiembre de 2014 áreas microfocalizadas de intervención o caracterización en el Caquetá (Unidad de Restitución de Tierras, 2015); sin embargo, había registradas en RTDAF, al 31 de diciembre de 2013, 1.095 solicitudes equivalentes al 2,03% del total, y que representan 108.912 ha que son solicitadas para restituir en el Caquetá (Unidad de Restitución de Tierras, 2014), aunque este departamento no tiene oficina de la Unidad de Restitución de Tierras.

Por último, la concentración de la propiedad es un problema en ambos departamentos. El indicador más comúnmente citado para denotar su concentración es el coeficiente de Gini, que según el informe de Desarrollo Humano 2011(PNUD, Colombia rural - Razones para la esperanza, 2011), para el Huila estaba en 0,78% en el 2009. Aunque a 2009 el grueso de la propiedad se clasificaba en la categoría de propiedades medianas (47,25%), el 23,18% eran propiedades grandes (IGAC, 2012), lo que implica que generalmente se presenta una alta concentración de tierra en pocas manos.

Un tema transversal es la injerencia de grupos armados ilegales en esta dinámica de conflictividad por el suelo. Según información de miembros de la Fiscalía Seccional de Florencia hay más de 63 predios de las veredas La Sombra, Caquetania, Las Nieves, Carbonal, La Machaca y Playa Rica en San Vicente del Caguán, así como otras propiedades rurales en Solano y Solita, que son de propiedad de las FARC, y administrados directamente por ellas a través del Frente 62 Combatientes del Yará, o personalmente por “Salvador”, quien administra las propiedades del extinto jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”. La Fiscalía, y medios nacionales (El Tiempo, 2013, y Bluradio, 2013) indican que los predios

han sido adquiridos por compras a sus propietarios, o por despojos a “enemigos” (presuntos narcotraficantes o paramilitares) de las FARC, o a campesinos que no observan las prescripciones ordenadas por la guerrilla para permitir su permanencia en el territorio.

Otras actividades ilegales con el manejo y disposición de las tierras tienen que ver con el repoblamiento del sector rural con población afín a su ideario o funcional a sus intereses: medios nacionales divulgaron que existe una estrategia de vincular población caucana de origen indígena en zonas controladas por las FARC, desde el 2011, y señalan que ese es el origen de las comunidades indígenas asentadas en Yaguará, Yará y La Tunia, que son zonas de presencia guerrillera (Caracol, 2013).

El manejo de los predios y su titulación es objeto de prácticas de coerción y de registro ilegal de las propiedades, en ocasiones con el concurso de funcionarios de la Superintendencia. La Fiscalía Seccional de Florencia ha manifestado que se ha dado el caso de registro de predios en el RTDAF de la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de neutralizar versiones de supuesto testaferrato, pero que después la misma persona ha pedido el levantamiento de la protección a la propiedad, y esta persona habría estado en todo momento al servicio o bajo las directrices de las FARC. Igualmente se presentan casos de entrega de predios a ciudadanos locales para que figuren como propietarios, o poseedores, y las FARC apoyan en las diligencias de legalización, o presionan a las comunidades para que le exijan al Gobierno que proceda a agilizar las titulaciones, incluyendo las de sus predios.

4.2.2. Repliegue vs. Mayor presencia de la fuerza pública: visiones encontradas sobre las políticas de seguridad en la región.

Uno de los grandes debates de la región se da frente a cómo mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el territorio. Con una larga historia de abusos por parte de la fuerza pública en la región, una gran parte de la población reclama la desmilitarización, entre ellos pobladores y organizaciones de municipios como Algeciras, San Vicente del Caguán y Puerto Rico. Sin embargo, otro grupo reclama una mayor presencia de la fuerza pública. Detrás de estas posturas encontradas converge el deseo por un territorio en paz, donde la fuerza pública vele por los derechos de todos los ciudadanos.

Algeciras, en el Huila, cuenta con la presencia de dos batallones, uno de alta montaña, lo que se debe en parte a que es un corredor estratégico de lo que fuera la zona de despeje durante las fallidas negociaciones de paz del gobierno de Pastrana. El municipio carga con el estigma de “municipio guerrillero”, por lo que las acciones de la fuerza pública han incluido capturas masivas, ejecuciones extrajudiciales, ocupaciones de bienes protegidos, empadronamientos, control del ingreso de alimentos, entre otros. Por tal motivo, la presencia militar, lejos de representar protección, genera en las comunidades altos niveles de desconfianza, incluso cuando la piensan en condiciones de posconflicto. Es por esto que algunos reclaman: “que no se involucre a la sociedad civil en los conflictos armados, incluyendo cese de persecución y montajes judiciales”³⁵. Esto mismo sucede en municipios de la subregión del Caguán, como lo afirma el testimonio de un habitante de la zona:

“Nosotros como campesinos somos el escudo. Hay mucha estigmatización. En otras partes cuando decimos de dónde [procedemos] inmediatamente nos tildan de ‘guerrilleros’”.³⁶

Además, muchos consideran que la presencia de la fuerza pública incrementa las posibilidades de enfrentamientos entre militares y guerrilla, por lo que preferirían no contar con tanta protección. “Ellos [Policía] allá no cuidan nada. [...] Ellos [Policía] no nos hacen mal a nosotros, pero lo que hacen es ponernos en riesgo, porque los otros [las FARC] atacan al pueblo porque ahí está la Policía cuidando. Pero, ¿qué cuidan?, si allá no hay un banco, no hay nada que cuidar”³⁷.

En San Vicente del Caguán y Puerto Rico, Caquetá, la presencia de la fuerza pública tampoco se asocia a incremento de la seguridad. En estos municipios se debe, además de lo mencionado en el párrafo anterior, a dos cosas. La primera se remonta a la historia del conflicto en la región. Esta se sustenta en la relación que hacen entre la fuerza pública y los grupos paramilitares, y lo sanguinario de las acciones allí cometidas. Lo anterior se evidencia en el siguiente relato: “La policía era cómplice de los paramilitares, ellos en una garita, en una de las casas, estuvieron viviendo 12 paramilitares y convivían, hasta tomaban trago”³⁸. La segunda se relaciona con acciones que algunos pobladores relatan sobre relaciones entre la policía y la delincuencia común: “la policía está en alianza con los mismos ladrones, les prestan las armas y luego se comparten las ganancias”³⁹, “tenemos inconvenientes porque la misma policía, en un caso, venía extorsionando a los comerciantes del municipio. ¿Cómo es posible que antes la guerrilla nos sacaba plata y ahora es la misma policía?”⁴⁰.

• • •

³⁵ Taller de intercambio de experiencias y análisis de política pública: recomendaciones dadas por líderes de la región Huila y Caquetá, Bogotá.

³⁶ Diálogo, Puerto Rico.

³⁷ Diálogo, Puerto Rico.

³⁸ Entrevista, Puerto Rico.

³⁹ Diálogo, Puerto Rico.

⁴⁰ Diálogo, Hobo.

Por otra parte, en municipios como Colombia, Neiva, Florencia y El Doncello, (donde es poca la presencia, sobre todo de la policía), los pobladores exigen del Gobierno nacional, el incremento en el pie de fuerza para controlar las acciones de inseguridad, y así ejercer la “autoridad en todas las zonas rurales”⁴¹. Algunos piden también mejoras en el servicio.

Algunos anhelan también el trabajo articulado entre policía, militares y JAC. “Veo la región respirando un ambiente de seguridad entre equipos de Policía y Ejército Nacional, equipos de presidentes de juntas, y autoridades político administrativas. Si continuamos como estamos trabajando vamos asegurar una tranquilidad en el territorio y asegurar la paz que es lo más importante de todo”⁴².

Las diferencias entre las posturas frente al aumento o disminución del pie de fuerza se relacionan también con la variación que han tenido los niveles de violencia en cada subregión en los últimos años. Si bien el incremento de pie de fuerza en lugares como Colombia, Huila, se ha visto reflejado en un descenso significativo en los homicidios que según cifras de la Policía Nacional pasaron de 12 por cada 10.000 habitantes en 2008 a 2,5 por cada 10.000 habitantes en 2013, en municipios como Puerto Rico, Caquetá, este no ha sido el caso, pues en 2008 se reportaron 12,9 homicidios por cada 10.000 habitantes y en 2013 la tasa incluso aumentó a 13,3, según la misma fuente. El incremento de las FF.MM. en este municipio ha coincidido con un aumento en la confrontación armada, que los habitantes relacionan y los lleva a un fuerte reclamo de desmilitarización de la zona.

Un debate adicional en relación con la política de seguridad es el del servicio militar obligatorio. La región

cuenta con una gran diversidad de organizaciones sociales, especialmente en Algeciras, San Vicente, Puerto Rico, Neiva y Florencia, que han abogado fuertemente por el respeto a la objeción de conciencia al respecto. “El llamado es a respetar el libre pensamiento y la objeción de conciencia, sobre todo si hablamos de postconflicto y tratados de paz”⁴³. Algunas organizaciones hablan del servicio militar obligatorio como una forma de “reclutamiento para la guerra”, en tanto que ocurre en contra de la voluntad de los jóvenes e implica entrar a formar parte activa del conflicto. Adicionalmente, algunos pobladores ven en esta disyuntiva un riesgo para sus familias, pues al tener un hijo presentando servicio, otros menores del hogar se convierten en blanco de reclutamiento forzado por parte de la guerrilla: “¿Por qué muchos jóvenes son obligados a prestar el servicio militar en zonas de alta presencia del conflicto? Esto genera desplazamiento porque llega el otro actor armado y le dice [a uno]: “Usted me tiene que dar su otro hijo porque ya tiene uno al servicio del Estado”⁴⁴.

Pero también hay otras voces que reconocen la importancia de esta prestación: “Creo que como colombiano, es un deber patriótico el servicio militar”⁴⁵. Las voces a favor consideran que este aumenta el sentido de pertenencia con el país, fortalece el compromiso con la construcción de un país democrático, donde la fuerza sea monopolizada por las FF.MM. y, además, algunos consideran que es una buena vía para aumentar el pie de fuerza que reclaman algunos municipios.

A pesar de lo polarizado que es el debate frente a las Fuerzas Armadas en la región, lo común detrás de las diferencias es el deseo generalizado de un territorio en paz. Esto se evidencia en las múltiples visiones asociadas a seguridad y convivencia ciudadana recogidas

en la investigación, las que suman casi el 20% de los sueños de los entrevistados.

A continuación algunas de las transformaciones que reclaman los pobladores de la región: “[Recomendamos la] reestructuración de la fuerza pública porque ya no hay confianza y por esta razón no se denuncia”, “creación de la independencia de la policía y que sea exclusiva para la seguridad ciudadana”, “mayor preparación de su talento humano para que sus acciones sean oportunas, efectivas y con compromiso”⁴⁶. En resumen, la población reclama esquemas de seguridad y convivencia eficientes y que actúen en el marco de los derechos humanos, lo que requerirá grandes transformaciones en la arquitectura y la cultura de las FF.MM. en el posconflicto.

4.3. Visiones de desarrollo

En la región las comunidades ponen como primer sueño para el postconflicto la equidad social, sobre todo teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen entre las zonas rurales y las urbanas. Los sueños se relacionan con la atención a sus necesidades básicas y la facilitación de oportunidades para el sostenimiento de forma legal. La región cuenta con un gran recurso mineral y natural, en donde podría estar la respuesta para este desarrollo anhelado por las comunidades. No obstante, diversas experiencias de explotación minera han mostrado que no es fácil lograr un buen retorno social para las comunidades donde se hacen las extracciones, sumado al impacto al medio ambiente que tiene cualquier intervención. Por otra parte, la economía campesina sola no podrá generar los recursos necesarios

rios para el tamaño de las transformaciones esperadas. El reto está en cómo lograr dicho desarrollo, de tal manera que genere los impactos esperados, sin sacrificar el medio ambiente y sin afectar el tejido social.

4.3.1. Lo más esperado: inversión social en el campo

En las 66 entrevistas apreciativas realizadas a líderes de la región, un 27% de las personas coincidieron en que su principal sueño para el postconflicto es el logro de mejores condiciones sociales y de productividad para el campo, sobre todo teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen entre las zonas rurales y las urbanas. Esta categoría contó con el porcentaje más alto, estando incluso por encima del relacionado con la seguridad. Esto evidencia que la población cuenta con altos niveles de arraigo a su región, y sueñan con vivir en ella, contando con las condiciones básicas para una vida digna, en cuanto a servicios, infraestructura y posibilidades de trabajo en el campo. El reto acá es cómo alcanzar dichas aspiraciones, teniendo en cuenta los grandes niveles de atraso en necesidades básicas que existen, sobre todo en lo rural.

Las difíciles condiciones en las que se encuentran los habitantes de los municipios que integran la región son evidentes. Como se muestra en la tabla de NBI presentada a continuación, es en la zona rural donde se encuentra la población que presenta mayor proporción de NBI, siendo el Caquetá el de mayor porcentaje (59,2%), con niveles incluso por encima del promedio nacional.

⁴¹ Diálogo, subregión 1.

⁴² Integrante de la fuerza pública. Entrevista apreciativa. Subregión 4.

⁴³ Diálogo, subregión 2.

⁴⁴ Diálogo, subregión 2.

⁴⁵ Diálogo local, Puerto Rico.

⁴⁶ Taller de intercambio de experiencias y análisis de política pública: recomendaciones dadas por líderes de la región Huila y Caquetá, Bogotá.

TABLA /04
Necesidades Básicas Insatisfechas en la región Huila – Caquetá

NBI (2011)	HUILA	CAQUETÁ	REGIÓN	NACIÓN
TOTAL	32,6%	41,7%	40,5%	27,8%
RURAL	48,8%	59,2%	53,3%	53,5%
CABECERA	21,8%	33,5%	33,7%	19,7%

Fuente: Elaboración propia con información del DANE.

El análisis de las cifras de NBI refleja algunas disparidades entre los municipios de la región. Los casos más críticos para el Huila son Colombia y Algeciras que reportan en lo rural 70 y 63% de NBI, respectivamente. Por otra parte, en el Caquetá el caso más alarmante es Puerto Rico con un 68% para la zona rural.

El ejercicio de cartografía social llevado a cabo por los participantes confirmó estas cifras e hizo evidente que si bien existen problemas en cuanto a cobertura y calidad educativa, preocupa sobre todo la escasez de vivienda y la falta de agua potable. *“Los problemas de servicios públicos básicos son esencialmente producto de la falta de agua potable (solo la zona urbana cuenta con este servicio), no manejo de aguas residuales o negras y déficit de baterías sanitarias. Esta última obedece a la poca planeación y prácticas de politiquería en la zona, ya que existen familias que han recibido hasta dos o tres baterías sanitarias y las venden o desechan”*⁴⁷.

Así mismo, la infraestructura vial es una de las principales demandas de la población de la región: *“Me*

*imagino con vías terciarias en perfecto estado, donde los campesinos puedan sacar sus productos a comercializarlos”*⁴⁸, afirma un habitante del lugar. Esto último requiere la realización del inventario de las vías existentes, incluyendo las que han sido creadas por las mismas comunidades y por las FARC, para mejorar la conexión, comunicación y comercialización de sus productos.

La situación de NBI y de bajas condiciones de infraestructura y para la productividad agraria ha convertido a la región en un terreno fértil para la guerrilla de las FARC. En algunos casos, son ellas quienes han promovido la construcción de escuelas, centros de salud y vías. En otros, son las mismas comunidades, en algunos casos bajo el liderazgo de las JAC: *“Aquí la presencia del Estado es muy débil y son sus mismos pobladores quienes se han encargado de construir tejido social, sus propias normas de convivencia, sus escuelas, carreteras, centros de salud”*⁴⁹.

Es el caso de la experiencia de *“Camino de Paz”* ocurrida en Colombia, Huila, en la que la comunidad,

liderada por las JAC, mediante diversas actividades, logró unir recursos económicos y trabajar en equipo para la construcción de la carretera del Sumapaz.

En este sentido, un gran reto para el Estado está en el cumplimiento de las demandas sociales de las comunidades a través de inversiones fuertes, que den muestras de avances claros fruto del posconflicto. A pesar de los costos que ha tenido la guerra para la población rural de esta región, esta teme que al desmovilizarse la guerrilla queden abandonados a su suerte. Sin el apoyo del Estado ni el de la guerrilla: *“¿Quién va a imponer el orden en la comunidad?, ya que el Estado no hace presencia en sus territorios ni hace inversión en ellos. Y las vías con las que cuenta (una comunidad) es porque la guerrilla organizó a la comunidad para arreglarlas”*⁵⁰. Las FARC también han aprovechado estas bajas condiciones sociales y de infraestructura para atraer a los campesinos al cultivo de coca. Esto sucede en el Caquetá, como se mencionó anteriormente.

La situación de pobreza que vive el sector rural de la región y las altas necesidades de infraestructura y de apoyos para el agro son uno de los mayores retos a enfrentar en el postconflicto. A su vez, se convierten en una gran oportunidad de generar victorias tempranas que permitan recuperar la confianza de la sociedad civil en el Estado e instaurar una cultura de paz y democracia que desmitifique la idea de que la única vía para el logro de la equidad social es la violencia.

4.3.2. Desarrollo sostenible: minería vs. desarrollo rural

Ante un panorama tan desolador, la gran pregunta es cómo lograr un avance significativo en las con-

diciones de vida de las zonas rurales de la región. La pregunta lleva a explorar visiones de desarrollo que se tejen entre los pobladores. El trabajo de campo devela dos posturas contrapuestas: una aboga por la vía del desarrollo agropecuario, la otra respalda la política minero-energética promovida por el Gobierno nacional. Aunque las dos posturas se enfrentan duramente en la región, y el tema genera discusiones acaloradas entre los pobladores, algo tienen en común: las comunidades sueñan con *“tener dónde trabajar, cómo sostenerse y poder volver al campo y volver a construir esa armonía que teníamos”*⁵¹.

La posición mayoritaria entre campesinos y organizaciones sociales se refiere al impulso de la agricultura y la ganadería en la región, como vía para el logro de condiciones de desarrollo y trabajo digno. La población se ha caracterizado por contar con una inconmensurable riqueza natural, que hoy representa opciones de desarrollo local y nacional. Esta riqueza no es ampliamente aprovechada, sobre todo porque, por un lado gran parte del territorio se encuentra protegido de explotación comercial por ser Zona de Reserva Forestal, Parques Nacionales, Santuarios de Flora y Fauna, o selva amazónica. Por otra, la larga y conflictiva presencia de las FARC en la región ha desincentivado la inversión.

Es por esto que las comunidades de los municipios priorizados sueñan con el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo productivo del campo. Se refieren a una mayor inversión agraria que genere desarrollo agroindustrial a partir de la capacitación al campesino, la tecnificación agraria, el fortalecimiento de la comercialización directa de los productos y, como se mencionó antes, el mejoramiento de vías terciarias.

⁴⁷ Diálogo, Subregión 1.

⁴⁸ Entrevista apreciativa, subregión 3.

⁴⁹ Diálogo, San Vicente del Caguán

⁵⁰ Entrevista, Colombia

⁵¹ Entrevista apreciativa, Tello.

Esto hace necesario “buscar canales de comercialización, crear con recursos de capital una estructura para que la región se vuelva competitiva en productos como la fruta, el cacao y el café. Por consiguiente, el Gobierno debe crear toda una estructura logística que le enseñe a la gente a producir y comercializar y que proporcione la garantía para que los campesinos tengan los ingresos deseados”⁵².

En el Caquetá algunas organizaciones demandan también el logro de la seguridad y la autonomía alimentaria, donde se reconozca la semilla nativa y se respete el papel de los custodios de semillas. “Nos están volviendo dependientes de semillas transgénicas, nos están obligando a los campesinos a dejar las semillas nativas [...] no se reconoce la capacidad del campesino en su autonomía de preservación del medio ambiente, al no utilizar químicos para poder cultivar. Esto no se valora y no se reconoce [...] Tenemos que reconocerlo como caqueteños, el día que los reconozcamos, nos van a dejar de dominar por el estómago”⁵³.

Especialmente en la subregión 1, el agua es un reto no solo para las viviendas, como se vio anteriormente, sino para la producción misma. Allí, la producción del café, sábila y frutas como granadilla, maracuyá y mora es la prioridad para los habitantes, por tanto, los sistemas de riego desempeñan un papel muy importante para la producción, pero gran parte del territorio no cuenta con ellos. “En estas tierras usted siembra lo que quiera y eso se da, pero no tienen agua (distritos de riegos) y eso sin agua no vale nada. Solo hay distrito de riego en 5 o 6 municipios”⁵⁴.

Por otro lado, aunque la subregión 2 es la arrocería del departamento, los habitantes no la ven como un potencial para el postconflicto, pues los TLC han hecho que ingrese arroz más barato al país, frente a lo que los agricultores sienten que no pueden competir, lo que ha llevado a grandes protestas en la región. A esto se suma la práctica del contrabando. Es por esto que esperan se “implementen estrategias y planes que ayuden al campesino a mitigar los daños causados por el TLC al sector arrocero”⁵⁵.

Además, consideran la posibilidad de mejorar la economía en la subregión con el “fortalecimiento de cultivos alternos como la pesca, el algodón, el cacao, con proyección de exportación”⁵⁶. No obstante, la pesca se ha visto afectada por los niveles de contaminación de las aguas y de sedimentación que posee la Represa de Betania, principal fuente de abastecimiento de pescado, tema de preocupación para estas comunidades, sobre todo de Hobo.

En San Vicente del Caguán y Puerto Rico el ganado es su principal vocación productiva, con los lácteos y los cárnicos. “Veo una industrialización y transformación de nuestros productos. Yo me imagino fincas con mayor ganado en menos terreno”⁵⁷. Sin embargo, no se puede desconocer que diseñar e implementar opciones alternas a la ganadería extensiva es un reto en esta subregión, producto de la erosión que se está presentando, lo que pone en riesgo la fertilidad del territorio.

Como se analizó anteriormente, otro aspecto muy relevante para esta subregión es “el acceso a la tierra, que está ligado con la condición de la tenencia, los pro-

cesos de titulación y con que hay muchos con mucha tierra y otros muchos con poca o que simplemente no tienen.”⁵⁸. Esto también contempla las zonas de reserva campesinas, tanto en el fortalecimiento de las existentes como en el reconocimiento de nuevas, como una opción que viabilice ese acceso a la tierra.

En la subregión 4, los habitantes sueñan con el fortalecimiento del cultivo y comercialización de productos típicos de la región amazónica, como caucho, cacao, productos no maderables, semillas y frutas amazónicas: arazá, copoazu y cocona. “Sueño a Florencia como una ciudad pujante, sede de muchas agroindustrias, con presencia hasta internacional por el aprovechamiento de muchos productos no maderables de uso farmacéutico y químico que se pueden obtener”⁵⁹.

Como ya se mencionó, 24% de las experiencias de paz identificadas por los participantes se refieren a proyectos productivos, la mayoría en el sector agropecuario y muchas de ellas relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos. Ejemplo de esto es un proyecto desarrollado por el Comité de Ganaderos del Caquetá y la Gobernación, gracias a la gestión de recursos del sistema nacional de regalías, para el sistema de reconversión ganadera para la paz, proyecto que tendrá una duración de seis años, y una inversión de más de 70 millones de pesos en el sector ganadero. Con este proyecto se busca mejorar la genética del ganado, hacer más eficiente el aprovechamiento de los pastizales y la producción de lácteos y cárnicos, a la vez que contempla un componente social para la promoción de mejores ambientes familiares entre los beneficiarios (Goberna-

ción del Caquetá, 2014).

En contraposición a las visiones de desarrollo que soportan las vías agropecuarias existen voces fuertes, aunque menos numerosas, que apoyan la exploración petrolera y la construcción de represas. Los defensores ven en ellas la oportunidad de traer inversión, recursos y oportunidades laborales para la región y la nación. Sin embargo, sus opositores señalan riesgos referidos a problemas ambientales y sociales.

Las economías extractivas han tomado gran fuerza en la región. La explotación petrolera y minera, y las centrales hidroeléctricas o represas son los protagonistas del modelo de desarrollo económico propuesto por el Gobierno nacional en estos departamentos. Según reportes de AsoQuimbo –Asociación de afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo–, el departamento del Huila reporta 14 solicitudes de obtención de licencia a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), para la construcción de microcentrales. Estas solicitudes son realizadas por la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica del Huila (Electrohuila) y sectores privados. Igualmente, en el marco del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena se proyecta la construcción de nueve represas, en las que se incluye la del Quimbo, que según fuentes de la Asociación, ha generado daños ambientales y sociales en la región. Así mismo, existen en el momento 11 áreas de exploración petrolera, solo en el Huila.

Si bien la situación se extiende en todo el territorio huilense, en el Caquetá se hace más visible la resistencia a los proyectos de extracción de hidrocarburos, argu-

• • •

⁵² Entrevista apreciativa, subregión 1.

⁵³ Diálogo, subregión 4.

⁵⁴ Entrevista apreciativa, subregión 1.

⁵⁵ Diálogo, subregión 2.

⁵⁶ *Ibíd.*

⁵⁷ Entrevista apreciativa, subregión 4.

• • •

⁵⁸ Diálogo, subregión 4.

⁵⁹ Entrevista apreciativa, subregión 4.

mentando el grave daño que provoca en el medio ambiente de la región. Las organizaciones respaldan sus posiciones en el hecho de que con la puesta en marcha de la política minero - energética del actual Gobierno nacional se han adjudicado zonas de amortiguación de áreas de conservación y se han realizado sustracciones a estas áreas que se encontraban protegidas para dar paso a procesos de prospección y posible explotación. Por tal motivo, en el Caquetá, y en menor medida en el Huila, está naciendo una expresión social muy fuerte que levanta su voz y adelanta sus acciones de movilización contra la extracción en la región y en pro de la defensa del medio ambiente, de la autonomía de los territorios y de los procesos sociales, organizativos y de desarrollo que allí se dan.

Estas voces se visibilizan en las recomendaciones dadas por líderes sociales del Caquetá que, al referirse a la política minero - energética, demandan una discusión democrática sobre esta política, participación de las comunidades, devolución de las concesiones otorgadas a empresas multinacionales y la consulta de las comunidades para todos los proyectos y concesiones minero - energéticas. Además, exigen *“protección del medio ambiente, la biodiversidad, territorios indígenas, y reparación de la población afectada por esos proyectos”*⁶⁰.

Estas posiciones se polarizan aún más por las constantes violaciones de derechos a la protesta y a la agremiación que algunos pobladores reportan, asociados con la entrada de este tipo de megaproyectos. Como lo afirma un habitante de la región: *“la resistencia a la*

*presencia de las grandes multinacionales en el país no solo pasa por un tema de cuidado del medio ambiente, sino por un tema de sobrevivencia, debido a que estas empresas ingresan al territorio acompañadas de un gran pie de fuerza que les garantiza la seguridad en el desempeño de sus operaciones y estos, a su vez, llegan acabando con los líderes, generando nuevas estigmatizaciones, rompiendo con el tejido social”*⁶¹.

Ejemplo de esto son las exploraciones sísmicas del Bloque Nogal - Manzano de la cuenca Caguán - Putumayo que son objetadas por amenazar los recursos ambientales presentes en el área, según lo ha denunciado la Corporación Caguán Vive. Los estudios los realiza Petrosismic, como contratista de Emerald Energy, y según los campesinos, *“varios dirigentes que se encontraban socializando sobre la problemática y el impacto de la locomotora minera en la región fueron fotografiados por funcionarios de dicha petrolera, lo que, sin duda, llena de preocupación a los campesinos, teniendo en cuenta que además vienen siendo víctimas de constantes amenazas por vía telefónica, donde se les quiere obligar a través de estas presiones a firmar los permisos de intervención”* (Arias, 2014).

Las petroleras también son señaladas por las comunidades de acabar con la infraestructura vial del Caquetá y Huila al transportar en tractomulas el crudo, en la vía hacia Neiva, y de afectaciones a las aguas, el aire y la sostenibilidad de los recursos agroecológicos.

Las actividades de protesta local en el Huila han generado la integración a una asociación más grande, el Movimiento Regional por la Defensa del Territorio, que

ha focalizado sus actividades principalmente contra la construcción de la represa del Quimbo. También existen quejas continuas por el maltrato laboral, la precarización del empleo petrolero y los accidentes laborales de la industria que, al evitar la contratación directa, los deja sin protección alguna luego de sufrido el percance. Las comunidades de Neiva se han movilizado, igualmente, contra exploraciones petroleras cerca del río Las Ceibas, que surte de aguas a Neiva.

A pesar de que hay una fuerte oposición a las actividades extractivas como opción de desarrollo en la región, algunas personas reconocen que son precisamente las realizadas alrededor de la minería y los hidrocarburos, las que representan una oportunidad de empleo en la región. Sobre todo donde la única ocupación es la que brinda la administración municipal. Los pobladores reconocen en la actividad minera una opción de vida, que consideran que si se lleva a cabo bajo estándares de cuidado medioambiental y social puede representar una buena oportunidad de desarrollo para la región: *“la explotación petrolera, así como la ganadería y la agricultura, forman parte de los trabajos principales de Colombia, por esto se debe generar conciencia de las prácticas del buen uso del petróleo y la mejor forma es educando, para proteger nuestra tierra del mal uso”*⁶².

Para algunos, la locomotora minero - energética puede también ser una buena opción de sustitución laboral para campesinos dedicados a cultivos ilícitos. *“Las actividades de extracción petrolera se están dando en las zonas donde antes existían los cultivos de ama-*

*pola, como mecanismo de sustitución de esta economía ilegal, encontrando que en el municipio de Colombia la mayor expectativa laboral de sus habitantes gira alrededor de conseguir trabajo en una compañía petrolera”*⁶³.

Frente a los argumentos ambientalistas, en contra de la extracción minera, algunos depositan su confianza en el Estado y su capacidad de regular las extracciones a favor del medio ambiente: *“teniendo en cuenta la realidad del sector minero colombiano, las entidades estatales han desarrollado diversos mecanismos para promover el desarrollo económico e industrial del país y a su vez mantener y proteger el medio ambiente. Colombia cuenta con una estructura institucional ambiental que mantiene un sano equilibrio entre la actividad minera y la responsabilidad social ambiental”*⁶⁴.

En medio de esta discusión, un gran reto para el postconflicto será cómo encontrar opciones de desarrollo sostenible, que permitan el logro de los sueños de equidad de las comunidades, sin generar mayores conflictividades sociales y sin impactar el medio ambiente. Median en esta discusión algunas posiciones que retoman argumentos de ambos polos. Algunos demandan *“construir apuestas de desarrollo que medien entre la apuesta campesina y lo comercial”*⁶⁵, y *“hacer más razonable las intervenciones de hidrocarburos con relación a los impactos en la región”*⁶⁶.

Estas voces intermedias, que se encuentran regadas entre algunos campesinos, líderes sociales y funcionarios, serán grandes aliadas para la construcción de alternativas de desarrollo sostenible en la región. Lograr esto pasará por el fortalecimiento de la participación

⁶⁰ Taller de intercambio de experiencias y análisis de políticas públicas, recomendaciones líderes de Huila y Caquetá.

⁶¹ Diálogo, subregión 3.

⁶² Diálogo, subregión 3.

⁶³ Entrevista, Colombia.

⁶⁴ Entrevista, Neiva.

⁶⁵ Entrevista Apiciativa, Tello.

⁶⁶ Entrevista Apiciativa, San Vicente del Caguán.

ciudadana en la definición del modelo de desarrollo en la región, así como en la veeduría de los proyectos a implementarse en esta dirección.

En este sentido, la región cuenta con unas experiencias interesantes de las que se pueden sentar bases para el postconflicto. Una de ellas es el proyecto de Escuelas de formación de veeduría ciudadana, hecho por la Contraloría General de la Nación con sede en Caquetá, a través de la oficina de participación ciudadana. El proyecto ofrece formación en veeduría ciudadana a organizaciones y líderes comunitarios, entregando herramientas jurídicas y procedimentales a las comunidades. Esto con el propósito de que ante la llegada de múltiples inversionistas nacionales e internacionales de explotación minera, los líderes tengan las capacidades y recursos para ejercer un mejor control social en las zonas rurales y urbanas de inversiones futuras.

Un reto adicional se refiere a la necesaria articulación entre instancias gubernamentales del orden nacional y local. *“El ministerio del Ambiente es el organismo rector de las políticas y regulaciones en materia ambiental en el país, las que deben estar articuladas con las otras políticas como la minera, con el objetivo de asegurar el desarrollo sostenible, en concordancia con lo que establece la Constitución Política como es el derecho a gozar de un medio ambiente sano, así como la protección del patrimonio natural y cultural de la nación”⁶⁷.*

V. Recomendaciones regionales

Teniendo en cuenta que el documento de recomendaciones nacionales de esta serie expone sobre todo propuestas para el nivel nacional, en este apartado se presentan algunas dirigidas especialmente a los niveles departamental y local.

Cultura de paz y democrática

Como se comentó en el apartado 3.1.3, las comunidades sueñan con que el postconflicto sea una oportunidad para impulsar una transformación cultural en pro de la solución pacífica de conflictos y de la consolidación de la democracia. Para esto, la principal recomendación para los gobiernos locales y departamentales es aprovechar este deseo comunitario para impulsar procesos educativos y culturales en la región. Por lo demás, se recomienda aprovechar las múltiples experiencias de construcción de cultura de paz que han impulsado las organizaciones sociales en la región, apoyándolas en su mejoramiento y ampliación de sus radios de acción.

Es también importante trabajar en los espacios de educación formal (ejemplo escuelas, escuelas de padres, universidades, SENA) y no formal (escuelas de deporte y artes, espacios de difusión artística y medios de comunicación locales), en temas de educación para la paz, con énfasis en aspectos como la resolución pacífica de conflictos, el perdón y la reconciliación regional, la cultura democrática y el análisis de la historia local, no solo en cuanto a la revisión de los hechos de violencia sino de las experiencias de construcción de paz que

han existido en la región. Un tema importante en este sentido es el logro de cobertura completa en todos los grados escolares y la ampliación de la oferta de educación superior, así como la ampliación de la alfabetización de adultos. Frente a esto la investigación encontró con preocupación que muchos líderes sociales, por ejemplo, de JAC, son aún analfabetas.

Se recomienda ampliar las acciones de apoyo psicosocial en temas de perdón y reconciliación, para víctimas registradas y no víctimas, sobre todo en los municipios más afectados por el conflicto. En esta labor también pueden servir de apoyo diversas organizaciones nacionales y locales que vienen realizando procesos en este sentido en la región. Al respecto es importante también trabajar en contrarrestar el estigma que existe frente a los pobladores de algunas zonas específicas de la región, en lo que pueden desempeñar un papel importante los medios de comunicación locales, regionales y nacionales, y los grupos artísticos, resaltando las experiencias de paz y los diversos recursos que existen en la región.

Para el fortalecimiento de la cultura democrática en el territorio se recomienda también la formación política y en cultura de paz de nuevos liderazgos, que se pueden ubicar en los partidos políticos, en las JAC, en funcionarios estatales locales, y en líderes sociales de las diversas organizaciones de base (de mujeres, jóvenes, víctimas y gremios). En este propósito pueden concurrir acciones del estado departamental y local, las organizaciones sociales con presencia regional, las universidades regionales y los empresarios locales.

Confianza entre los pobladores y la fuerza pública

Uno de los grandes retos de la región es restable-

cer lazos de confianza entre los pobladores y la Fuerza Pública, como medio indispensable para garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado en el posconflicto. Lo anterior implicará una amplia reforma institucional de la Policía y las Fuerzas Militares a nivel nacional, en la que se recomienda, entre otras, la revisión de los esquemas de seguridad rural, modificaciones profundas en la educación de la fuerza pública en todos sus niveles y la revisión a los incentivos de ascenso que pueden promover el logro de resultados sin importar los medios.

En lo local, es necesario el reconocimiento del Estado de su responsabilidad en algunos actos de abuso de poder y violación al DIH y, por tanto, a sus víctimas. En este sentido, un proceso de perdón y reconciliación se vería beneficiado si las personas constatan que los individuos de la institución que han cometido abusos de poder son juzgados o, al menos, expulsados del servicio activo.

Por tratarse de un tema tan sensible en la región, se recomienda impulsar un debate amplio sobre el servicio militar obligatorio, que analice opciones de reforma como la inclusión del servicio civil entre las opciones, o la generación de incentivos por el servicio, como el pago por este.

Por otra parte, la confianza entre la población y la fuerza pública también implica la superación del estigma al que han estado sometidos algunos territorios, y muchas organizaciones sociales, especialmente con ideologías de izquierda. Frente a esto se recomienda propiciar el acercamiento entre la fuerza pública, las organizaciones sociales y las JAC, por ejemplo, en la planeación, ejecución y veeduría de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana – PISCC. Las organizaciones pueden hacer importantes aportes, sobre todo en los programas para la promoción de una

convivencia pacífica. En este sentido, también se recomienda aumentar la vinculación de la sociedad civil en los Consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como en los Comités de Orden Público.

Organizaciones Sociales y JAC: aliadas en la construcción de postconflicto

Como se pudo apreciar en el desarrollo del documento, las organizaciones sociales y las JAC son un activo de la paz, es por esto que se les debe volver pares en el proceso y construir con ellas escenarios de postconflicto duraderos. Su experiencia e historia deja enseñanzas para la construcción de paz en la región, que puede ahorrar tiempo y esfuerzo en el momento de diseñar, no solo la implementación de los acuerdos, sino vías para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana. Sumado a que sus integrantes son líderes con legitimidad en sus comunidades, que servirán de puente entre las comunidades y el Estado.

A pesar de la fuerza con que cuentan estas organizaciones sociales y comunales, requieren recursos económicos y fortalecimiento técnico, así como una mayor integración a procesos reales de participación que redunden en el fortalecimiento y bienestar de las comunidades en general. También se hace necesario que desde lo local se impulsen o fortalezcan las veedurías ciudadanas para generar mayor seguimiento a los planes y proyectos formulados (ejemplo: planes de desarrollo, PAT, PISCC).

Otro aspecto fundamental, que vincula sobre todo a las JAC, es la necesidad de formación en mecanismos alternativos de resolución de conflictos que brinde una mayor cualificación a quienes desde esta organización comunal tienen bajo su responsabilidad ayudar a solucionar de manera pacífica los problemas, de distinta

índole, que se presentan en sus comunidades. Esto requiere del diseño de una estructura, por parte del Estado, que permita apoyar a estas personas cuando ya no esté bajo su potestad la solución de alguna de las situaciones identificadas.

Pensar en el postconflicto implica crear vías para fortalecer estos espacios de regulación y organización comunitaria, de tal manera que puedan aportar a la agenda de paz nacional y fortalecer la presencia del sistema de justicia en lo rural, para evitar así que los vacíos de poder de la justicia sean cooptados en el futuro por otros grupos ilegales. Esto incluye, entre otras cosas, diseñar estrategias para generar un trabajo más articulado entre las JAC, sistema de justicia y estados locales.

Escuchar, reconocer y valorar el trabajo de las organizaciones sociales y comunales en el territorio y el importante papel que ellas desempeñan en la construcción de paz desde lo local y vincularlas a la definición de planes para el postconflicto será de vital importancia como un medio para democratizar, validar y territorializar el proceso de negociación que se adelanta actualmente.

Desarrollo rural

El desarrollo rural es quizás uno de los aspectos que más genera expectativas en la comunidad a la hora de hablar de construcción de postconflicto, por esto nos atrevemos a afirmar que es de los principales retos. Las comunidades han identificado falencias en temas de infraestructura, apoyos para el agro, sistemas de riego, entre otros. Aunque hay experiencias exitosas de comunidades que han venido resolviendo las brechas, aportando con esto al bienestar social de sus comunidades. Para lograr la superación de estas falencias se requiere del trabajo articulado entre gobiernos locales,

sector empresarial y gremios productivos, que permitan mejorar los impactos de lo que ha realizado cada uno de estos por separado y optimizar recursos.

El análisis de esta investigación permitió identificar experiencias productivas y de sustitución de cultivos de uso ilícito que son consideradas experiencias exitosas de paz en la región, por tanto, replicarlas sería un ejercicio interesante, para lo que se requiere un mayor apoyo logístico, técnico, humano y económico del Estado y del sector productivo, pues esto permite fortalecer a los campesinos como productores, contribuir a su desarrollo y a la superación de las falencias mencionadas en el párrafo anterior. Otra estrategia que se puede convertir en clave importante para el desarrollo rural es la gestión de proyectos por regalías, para lo que se requiere unos gobiernos locales cualificados y disciplinados, capaces de conseguir para sus territorios estos recursos.

Muy de la mano de lo ya expuesto, que va en la línea de la gestión de recursos, es el trabajo unido que se puede generar en los municipios que comparten características y que apoyados en estas presentan proyectos conjuntos al Gobierno nacional. Explorar esta posibilidad permitirá además la construcción de una visión de territorio mucho más fuerte. Para esto es de vital importancia el apoyo de las gobernaciones, tanto técnico como en asesorías y acompañamiento en la ejecución de las iniciativas.

En ese sentido, el Huila cuenta con un activo importante: la ordenanza No. 010 que declara laboratorios de paz a 14 municipios del departamento, por lo que pueden, bajo esta categoría, pensar de manera articulada soluciones para los problemas generados por el conflicto armado, lo que los puede convertir en una oportunidad de gestión de proyectos ante entidades nacionales e internacionales.

Desarrollo sostenible

Este es otro de los grandes retos en la región. La disyuntiva entre la protección del medio ambiente y las actividades extractivas hace urgente una definición del ordenamiento territorial que también contribuya a precisar el uso del suelo en la región, para poder definir las actividades que se pueden llevar a cabo en pro del desarrollo. Este proceso implica una definición más participativa del crecimiento local y que corresponda a las realidades territoriales y las construcciones de región según los sueños de las comunidades.

Por otro lado, también se establece necesaria la realización de estudios previos serios y responsables en las zonas donde se efectúan actividades extractivas, de manera que arrojen resultados reales y tengan impacto en el diseño de proyectos en el marco de derechos y de respeto del medio ambiente.

En conclusión, aunque la región cuenta con una larga historia de conflicto que deja un saldo de retos complejos para un estadio de posacuerdo, las múltiples experiencias de paz, sobre todo desde el sector social, son un activo importante a considerar en esta fase que vive el país de diseñar acciones de preparación de una vida en paz, libre del conflicto interno, para la región.

Referencias

Arias, A. (2014) Oposición a la minería en el Caguán. Recuperado el 14 de 12 de 2014, de Prensa Rural: <http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article15647>.

Asociación de Colonos del Pato. (s.f.) El Pato-Balsillas - Primera Zona de Reserva Campesina del País.

Bluradio. (2013) Así expropiaban tierras las Farc en el Caguán, Caquetá y Meta. Recuperado el 10 de 10 de 2014, de <http://www.bluradio.com/20254/asi-expropiaban-tierras-las-farc-en-el-caguan-caqueta-y-meta>

Caguán, H. d. (07 de 2014). (D. M. Toledo, Entrevistador).

Campoalegre noticias. (20 de 10 de 2014). Campoalegre noticias. Recuperado el 10 de 11 de 2014, de <http://www.campoalegrenoticias.com/enfrentar-la-extorsion-un-compromiso-de-todos-los-huilenses/>

Caracol. (2013) FARC estaría repoblando con indígenas tierras baldías de Caquetá y Meta. Recuperado el 8 de 9 de 2014, de <http://www.noticiascaracol.com/nacion/farc-estaria-repoblando-con-indigenas-tierras-baldias-de-caqueta-y-meta>.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013) Guerrilla y Población Civil: Trayectoria de las FARC 1949-2013. Bogotá: Imprenta Nacional.

Círculo de Lectura. (2015) Círculo de Lectura Infantil y Juvenil. Obtenido de <http://www.circulodelectura.org/>

DANE. (2014).

Diario del Huila. (2014) Funerarias, objetivo de las FARC. Diario del Huila, 3a.

El Líder. (2011) Homenaje al exgobernador González Arias. Obtenido de <http://www.ellider.com.co/2011/06/27/homenaje-a-exgobernador-gonzalez-arias/>

El Líder. (2014) Obtenido de Carros incinerados en San José del Fragua: <http://www.ellider.com.co/2014/01/31/carros-incinerados-en-san-jose-del-fragua/>

El Líder. (2014) Obtenido de Capturan hombre que perpetró atentado en hotel de Neiva: <http://www.ellider.com.co/2014/03/29/capturan-hombre-que-perpetro-atentado-en-hotel-de-neiva/>

El Mundo. (2011) Algeciras, un pueblo que vive acosado por los constantes ataques de las FARC. Obtenido de <http://www.elmundo.es/america/2011/05/23/colombia/1306172970.html>

El Tiempo. (2007) Con cuentos hacen soñar a los niños del Caguán. Obtenido de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3841994>.

El Tiempo. (2011) La extorsión desvela a San Vicente del Caguán (Caquetá). Obtenido de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10133364>

El Tiempo. (2013) Fiscalía va por 82.000 hectáreas en poder de las Farc. Recuperado el 28 de 11 de 2014, de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12965562>

Fundación Ideas para la Paz (21 de agosto de 2014). Relatorías I Diálogo regional “*Sueños para el Postconflicto*”. San Vicente, Caquetá, Colombia.

Gobernación de Caquetá. (2015) Economía. Obtenido de <http://www.caqueta.gov.co/index.php/nuestro-departamento/economia>

Gobernación del Caquetá. (2014) Reconversión Ganadera para la Paz cambiará la historia de Caquetá. Obtenido de <http://www.caqueta.gov.co/index.php/noticias-secretaria-de-agricultura/1986-reconversion-ganadera-para-la-paz-cambiara-la-historia-de-caqueta>

Gobernación del Huila, Fundación del Alto Magdalena, PNUD y Corporación Casa de la Memoria Quipu Huasi. (2014) Política pública de equidad de género para las mujeres huilenses. Neiva: sin publicar.

González Arias, J. J. (2013) Neiva: conflicto y marginalidad urbano rural. En S. m. Alcaldía de Neiva, Historia comprensiva de Neiva (págs. 553-599). Neiva.

IGAC. (2012) Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. CEDE (UNIANDES) - IGAC - Universidad de Antioquia.

La Nación. (2013) Huila, potencia agropecuaria. Obtenido de <http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/216728-huila-potencia-agropecuaria>.

MOE, Corporación Nuevo Arcoiris, s.f. (s.f.). Monografía Político Electoral Departamento de Huila, 1997 a 2007.

Morales, R. D. (13 de febrero de 2013) Conferencia: Análisis de inteligencia del Ejército colombiano. Caquetá.

PARES. (2014) Fundación Paz y Reconciliación. Obtenido de Ensayo que recoge las diferentes perspectivas que tienen los líderes nacionales y regionales del movimiento social de Marcha Patriótica sobre su interés en participar en política y la expectativa sobre los diálogos de La Habana, para CHEMONICS/USAID: <http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2014/08/Historia-y-perspectivas-de-la-Marcha-Patri%C3%B3tica1.pdf>

Periódico El Líder. (08 de 11 de 2014) El Líder. Recuperado el 08 de 11 de 2014, de <http://www.ellider.com.co/2014/11/08/policia-metropolitana-para-florenia/>.

PNUD. (Junio de 2010). Huila: Análisis de la conflictividad. Obtenido de http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/COL/00058220_Analisis%20de%20conflictividad%20Huila%20PDF.pdf

PNUD. (2010) Informe Nacional de Desarrollo Humano - Huila, Tierra de Promisión.

PNUD. (2011) Colombia rural - Razones para la esperanza. Recuperado el 1 de 12 de 2014, de http://escuelapnud.org/biblioteca/documentos/abiertos/06_indh2011co.pdf

Reyes Posada, A. (2009) Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma y Friedrich Ebert Stiftung - FESCOL.

Tovar Zambrano, B. (1995) Historia General del Huila. En V. d. República, Diagnóstico Departamental Huila.

Unidad de Restitución de Tierras. (2014) Informe anual de gestión, plan de acción 2013. Recuperado el 1 de 12 de 2014, de <https://www.restituciondetierras.gov.comedia/descargas/Rendicion%20de%20cuentas/2014/Informe%20final%20de%20gestion%20-%20Plan%20de%20Accion%202013.pdf>

Unidad de Restitución de Tierras. (2015) Unidad de Restitución de Tierras. Recuperado el 3 de 12 de 2014, de <https://www.restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=92>

Universidad Antonio Nariño. (2001) ABC. Lo mejor del Huila para el Mundo. De la A a la Z. Fascículo N° 1. Obtenido de http://www.huila.gov.co/documentos/educacion/abc_huilensidad/FASCICULO%2001.pdf

UNODC. (2014) Colombia: Monitoreo de cultivos de coca 2013. Bogotá, Colombia.



ISBN: 978-958-59274-3-8

Fundación Ideas Para La Paz (FIP)

Calle 100 No. 8ª – 37 Torre A. Of. 305
Bogotá Tel. (57-1) 218 3449
e-mail: fip@ideaspaz.org
www.ideaspaz.org

HUILA

CAQUETÁ

**Recursos y retos para
el postconflicto en la
región Huila y Caquetá**

Capacidades locales para la paz

